



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión: 2 | Pág. 1 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|------------|--------------|

**ACTA 006
REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ DE CONCILIACIÓN**

En Bucaramanga, a los veintiseis (26) días del mes de Marzo de 2012 siendo las siete (4:00 p.m.), previa convocatoria, se reunieron en el Despacho de la Oficina Asesora Jurídica, el Comité de Conciliación para la Defensa Judicial del Departamento de Santander.

CONVOCADOS:

Dr. Reynaldo Jazzneth Viviescas Pérez /Delegado del Gobernador
Dra. Margarita Escamilla Rojas/Secretaria de Hacienda.
Dr. Juan Rangel Vesga/Tesorero General del Departamento
Dr. Jairo Jaimes Nãñez/Secretario General
Dr. Roberto Ardila Cañas/Jefe Oficina Asesora Jurídica

INVITADOS:

Dr. Aquileo Cáceres Chipagra /Jefe Oficina Control Interno
Dr. Pablo Eduardo Ramírez Castro/Secretario de Educación
Dr. Oscar Mauricio Hinestroza/Abogado Sec. Educación
Dr. Ricardo Flórez/Sec. De Salud
Dra. Nancy Garcés Villamizar/ Abg. Sec Salud
Dra. Adela Riaño/Abg. Sec Salud.
Dr. Eliecer Delgado Jiménez/ Abg. Coordinación Personal.
Dra. Judith Patricia Esteban/Coord. Fondo Pensiones
Dr. Oscar Javier Gómez Arias/Abg. Fondo de Pensiones

ORDEN DEL DIA:

- I. Verificación del quórum.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Elección del presidente.
- IV. Estudio solicitudes de conciliación
- V. Varios.

A. SECRETARIA DE EDUCACION

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de ANA JOAQUINA MEDINA GUIZA
2. Solicitud de conciliación extrajudicial de ANGELINA REMOLINA DE GALVIS.
3. Solicitud de conciliación extrajudicial de ARMANDO CASSIANNI SANTAMARÍA.
4. Solicitud de conciliación extrajudicial de MARIA CONSUELO RAMIREZ VALLEJO.
5. Solicitud de conciliación extrajudicial de NELCY SOBEIDA PEÑA DE GARCÍA Y OTROS.
6. Solicitud de conciliación extrajudicial de EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ.



| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág 2 de 59 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|

B. SECRETARIA GENERAL.

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de LIPSAMIA RENDON CROSS.
2. Solicitud de conciliación extrajudicial de MELBA CORZO AFANADOR.

C. SECRETARIA DE SALUD.

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de INGRID JOHANNA CALVETE Y OTROS.
2. Solicitud de conciliación extrajudicial de JOSE POLICARPO GERENA.
3. Solicitud de conciliación extrajudicial de DAVID CASTILLO MENDEZ.

DESARROLLO DE LA SESION

I. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

ASISTENTES:

Dra. Margarita Escamilla Rojas/Secretaria de Hacienda.
Dr. Juan Rangel Vesga/Tesorero General del Departamento
Dr. Jairo Jaimés Nãñez/Secretario General
Dr. Roberto Ardila Cañas/Jefe Oficina Asesora Jurídica

INVITADOS ASISTENTES

Dr. Aquileo Cáceres Chipagra /Jefe Oficina Control Interno
Dr. Oscar Mauricio Hinestroza/Abogado Sec. Educación
Dra. Nancy Garcés Villamizar/ Abg. Sec Salud
Dra. Adela Riaño/Abg. Sec Salud.
Dra. Maria Ayde Afanador Moreno
Dr. Eliecer Delgado Jiménez/ Abg. Coordinación Personal.
Dra. Judith Patricia Esteban/Coord. Fondo Pensiones
Dr. Oscar Javier Gómez Arias/Abg. Fondo de Pensiones

AUSENTES:

Dr. Reynaldo Jazzneth Viviescas Pérez /Delegado del Gobernador
Dr. Pablo Eduardo Ramírez Castro/Secretario de Educación
Dr. Ricardo Flórez Rueda/ Sec. De Salud

II. APROBACION ORDEN DEL DIA

Se da a conocer el orden del dia por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación del Departamento y se pone a consideración que luego del envío de la convocatoria, la oficina de Gestión de Ingresos allega el concepto del caso de RUBEN JIMENEZ PLATA, en este mismo sentido pone de manifiesto estudiar la procedencia de la conciliación para el proceso



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág 1 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|

de Autopista Duitama S.A. contra los Departamentos de Santander y Boyacá, por solicitud del Dr. Roberto Ardila Cañas, jefe de la Oficina Jurídica; por lo que se solicita a los asistentes que si a bien lo tienen se someta el caso al respectivo estudio, Finalmente se aprueba el orden del día conforme lo expuesto.

III. ELECCION PRESIDENTE

Por unanimidad decide elegir al Dr. Jairo Jaimes Yañez, Secretario General del Departamento para que oficie como presidente en la sesión.

IV. ESTUDIO DE CASOS PRESENTADOS PARA CONCILIACION

A. SECRETARIA DE EDUCACION

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de ANA JOAQUINA MEDINA GUIZA.

Expone el caso el Dr. Oscar Mauricio Hinestroza Ariza, abogado de la Secretaría de Educación del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|--|---|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OSCAR MAURICIO HINESTROZA ARIZA |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | CUANTIA |
| ANA JOAQUINA MEDINA GUIZA | \$742.604.592.00 |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-DEPARTAMENTO DE SANTANDER-NACION MINSITERIO DE EDUCACION NACIONAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER. |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| ACCIÓN JUDICIAL: | REPARACION DIRECTA |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | NO OPERA LA CADUCIDAD POR SER PRESTACIONES DE TRACTO |



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 4 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|

| | |
|---|----------|
| | SUCESIVO |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |

1. HECHOS RELEVANTES

- El apoderado de la señora ANA JOAQUINA MEDINA GÜIZA manifiesta que su poderdante ostentó la calidad de trabajador oficial al servicio de la Universidad Industrial de Santander – UIS.
- Que mediante resolución No. 308 de fecha febrero 22 de 2010 se le reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación por parte de la Universidad Industrial de Santander – UIS.
- Que su poderdante sufrió un accidente de trabajo que le mermó y limitó seriamente su capacidad de trabajo y le provocó la pérdida de la movilidad del brazo derecho.

2. PRETENSIONES

- El apoderado de la parte convocante pretende que se declare administrativamente responsables a las citadas entidades de los daños y perjuicios materiales y morales causados a la señora ANA JOAQUINA MEDINA GÜIZA.
- Condenar a las entidades accionadas a pagar a la actora ANA JOAQUINA MEDINA GÜIZA, la suma de setecientos cuarenta y dos millones seiscientos cuatro mil quinientos noventa y dos pesos moneda corriente por concepto de daños y perjuicios materiales y morales.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico consiste en determinar si el Departamento de Santander es responsable de la demora en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de pensión; igualmente si es responsables de los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por la accionante.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

- **CAPACIDAD JURIDICA:** La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar se las personas que intervienen en el trámite conciliatorio están legitimadas o cuentan con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 5 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|

- Dentro de la convocatoria se adjunta copia del poder
- Las pruebas que relaciona y pretende hacer valer el apoderado de la parte convocante son:
 - Copia del Contrato de Trabajo entre la Universidad Industrial de Santander y ANA JOAQUINA MEDINA GÜIZA
 - Copia de la Historia Clínica.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el caso que nos ocupa es importante recordar que la actora firmó un contrato de trabajo con la Universidad Industrial de Santander ente que goza de autonomía administrativa y financiera, sin que el Departamento de Santander haya tenido injerencia alguna tanto en la vinculación como en el desarrollo de las actividades que desarrollara la señora ANA JOAQUINA MEDINA GÜIZA, por lo tanto se considera que no procede conciliación alguna respecto de lo solicitado por el apoderado de la accionante.

Cabe precisar que los concepto jurídicos no son obligatorios jurídicamente, ya que se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para los miembros del comité de conciliación, de allí que los integrantes del mismos; a quienes les corresponda tomar una decisión, la toman aplicando su propio criterio.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, en razón a que al Departamento de Santander no le asiste legitimación en la causa por pasiva para actuar, teniendo en cuenta que de conformidad con los estatutos de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER se tiene que es un ente universitario autónomo, de servicio público cultural, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional y organizado como establecimiento público del orden departamental, con personería jurídica y autonomía académica, administrativa y financiera; que el Departamento de Santander no ha proferido acto administrativo alguno toda vez que desde el nombramiento de la convocante, la conciliación judicial, la aceptación de su renuncia y el otorgamiento de la pensión de jubilación fueron actuaciones propias del ente universitario, por consiguiente y atendiendo a que la legitimación del demandado consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda, no es procedente llegar a un acuerdo conciliatorio del caso objeto de estudio.

2. Solicitud de conciliación extrajudicial de ANGELINA REMOLINA DE GALVIS.

Expone el caso el caso el Dr. Oscar Mauricio Hinestroza, abogado de la Secretaría de Educación del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Version: 2 | Pág 6 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|-------------|

| | |
|--|--|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OSCAR MAURICIO HINESTROZA ARIZA |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | CUANTIA |
| ANGELINA REMOLINA DE GALVIS | |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | NACION MINSITERIO DE EDUCACION NACIONAL – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMETNAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA S.A |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| ACCIÓN JUDICIAL: | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | NO OPERA LA CADUCIDAD POR SER PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |

1. HECHOS RELEVANTES

- Mediante Resolución No.0714 del 4/09/2007 se reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación a la docente ANGELINA REMOLINA DE GALVIS.
- A través de derecho de petición la docente solicito el ajuste de la pensión mediante inclusión de factores salariales en el reconocimiento de la pensión de jubilación, petición que según el convocante no ha sido resuelta.

2. PRETENSIONES

- El apoderado de la parte convocante pretende la nulidad de la resolución No. 00714 de abril 9 de 2007 que reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación sin la totalidad de los factores salariales.
- Que se declare la nulidad parcial de la resolución No. 1137 de octubre 26 de 2009 por medio de la cual se hace un ajuste a una pensión de jubilación como docente nacionalizado.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 7 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|-------------|

- Que se declare la nulidad parcial de la resolución No. 0001 de enero 14 de 2010 por medio de la cual se niega un ajuste a una pensión de jubilación como docente nacionalizado.
- Declara la convocante que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en cuya liquidación se incluyan la totalidad de los factores salariales devengados a partir de la acreditación del status pensional.
- Condenar a las entidades accionadas a pagar los ajustes de valor conforme al índices de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 178 del C.C.A.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico consiste en determinar si los actos administrativos acusados al generar una respuesta negativa deben declararse nulos y en su lugar proceder a realizar la inclusión de los factores salariales solicitados por la convocante anteriores al cumplimiento del status pensional.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

- **CAPACIDAD JURIDICA:** La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar se la persona que interviene en el trámite conciliatorio está legitimada o cuenta con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente

Dentro de la convocatoria no se adjunta copia del poder

Las pruebas que pretende hacer valer el apoderado de la parte convocante se refiere:

- Resolución No. 00714 de abril 9 de 2007.
- Resolución No. 1137 de octubre 26 de 2009.
- Oficio No. 098 de enero 14 de 2010.
- Resolución No. 0001 del 31 de enero 2012.

REFERENTE O PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO MEDIANTE LA CUAL SE UNIFICO DE CRITERIO FRENTE A LA INCLUSIÓN DE FACTORES SALARIALES EN MATERIA PENSIONAL

Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-25-000-2006-7509-01(0112-09). MP. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILLA. Acción de nulidad y restablecimiento, que corresponde a Sentencia de UNIFICACIÓN proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo del Estado, con salvamento de voto del Dr. Gerardo Arenas Monsalve se señala:



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión: 2 | Pág. 8 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|------------|--------------|

Los factores que constituyen el ingreso base de liquidación en la Leyes 33 y 62 de 1985, tienen carácter enunciativo y no taxativo, y por tanto no impide la inclusión de otros factores salariales devengados en el último año de servicios, así no se haya hecho el respectivo descuento, en consideración:

a) La interpretación taxativa vulnera el principio de progresividad

De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aún así, también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.

b) La Interpretación taxativa vulnera el principio de igualdad

El artículo 53 de la Constitución Política, en virtud del cual en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho ha de optarse por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios. Es por ello que la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional, sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.

c) La interpretación taxativa vulnera el Principio de la realidad sobre las formalidades.

En atención al citado precedente, es preciso aclarar que, la Sala no desconoce la competencia radicada por la Constitución Política en cabeza del legislador y el ejecutivo respecto de la regulación de las prestaciones sociales de los empleados públicos; sin embargo, dada la redacción de la disposición analizada, a saber la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiando su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.

d) la interpretación taxativa no vulnera el Principio de Protección del Erario Público

Si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 9 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|-------------|

que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de Ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar. En este orden de ideas, la protección al erario público es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los cuales la Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra efectivizar ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de ellos, toda vez que, como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del Estado Social de Derecho.

e) En la Liquidación de la pensión de jubilación debe tenerse en cuenta todos los factores que constituyen salario.

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando. Sentencia que ya fue acogida por los Juzgados Administrativos y Tribunal Administrativo de Santander, además de

De otra parte y en aras de dar cumplimiento a la normatividad jurídica preexistente me permito transcribir el artículo 114 de la Ley 1395 en el cual se señala “Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores afiliados..., para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contencioso administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos”.

• Se hace imposible verificar por parte de esta secretaria si existe referente o precedente jurisprudencial relacionando las sentencias favorables o en contra de la entidad relacionada con los hechos de la solicitud de conciliación, toda vez que quien asume la defensa judicial del Departamento es la oficina jurídica. Por tanto y acorde con la guía de estudio de las solicitudes de conciliación extrajudicial “.... Las oficinas jurídicas o dependencias que hagan sus veces, deben diseñar e implementar un banco de fallos y de precedentes jurisprudenciales temáticos que contemple el acopio de las diferentes providencias favorables o condenatorias contra la entidad y los respectivos documentos o estudios jurídicos que analicen los fallos agrupados por temas de mayor conflictividad de la entidad...”

CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Analizados los antecedentes administrativos y legales, los miembros del Comité de conciliación del Ministerio de Educación Nacional adoptaron la decisión de actualizar la Política General de Conciliación Extrajudicial, para la participación de sus apoderados en



| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág 10 de 59 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|

las audiencias de Conciliaciones Judiciales y Extrajudiciales a que éste convocado, del siguiente tenor:

“En las audiencias de conciliación prejudicial y judicial a que se convoque por litigios en los que se debate reconocimiento y pago de prestaciones sociales e igualmente prestación de servicios de salud a los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se deberá llamar en garantía a la entidad territorial que expidió el acto administrativo objeto de la litis o la que deba por competencia efectuar reconocimiento de prestaciones y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como titular y vocera del patrimonio autónomo en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito entre la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION y dicha entidad como consta en la escritura pública 0083 del 21 de junio de 1990, para que sean estas las entidades que coordinadamente estudien y viabilicen o no la conciliación respecto de las pretensiones del demandado o solicitante en cada caso de conformidad con el art. 56 de la Ley 962 de 2005 en concordancia con el decreto 2831 de 2005”

CONCLUSIONES

- Dada la descentralización del sector educativo en virtud de la Ley 60 de 1993 y posteriormente la Ley 715 de 2001, este Ministerio perdió la facultad de ser nominador, facultad que fue trasladada a los Departamentos, Distritos y los Municipios certificados, correspondiendo la administración del personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales a los Gobernadores y Alcaldes respectivos.
- Las funciones que ejercían los Representantes de la Ministra de Educación Nacional ante las entidades territoriales en relación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio conforme a los artículos derogados por el artículo 61, se encuentran en cabeza de las Secretarías de Educación en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 (artículo 56), reglamentados en lo pertinente por el Decreto 2831 de 2005.

CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA FIDUPREVISORA S.A

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE JURIDICO Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

1. Que Fiduciaria la Previsora es una entidad de servicios financieros, cuyo objeto social exclusivo es la celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las Sociedades Fiduciarias, pro normas generales y por normas especiales esto es, la realización de los negocios fiduciarios, tipificados en código de comercio y previstos en el estatuto orgánico del sector financiero como en Estatuto de Contratación de la Administración Pública, al igual que en las disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten las anteriormente detalladas y NO el reconocimiento de derechos sociales de carácter prestacional.
2. Que el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, es una cuenta



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 11 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|

especial de la Nación, con independencia patrimonial contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados en la actualidad por Fiduciaria la Previsora S.A., la cual actúa como representante y vocera del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en razón del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública No. 0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaria 44, prorrogado sucesivamente y a la fecha vigente, celebrado con la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

3. Que Fiduciaria la Previsora S.A solo actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en dicha calidad solo está obligada a pagar las prestaciones dentro del marco de la ley.

4. Que de la misma manera las fiduciarias como la FIDUPREVISORA S.A., deben atender la obligación de salvaguardar su propio patrimonio como prenda general de sus acreedores, de manera que no puedan comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio determinado, asumiendo gastos inherentes a un contrato de fiducia en particular con cargo a su propio peculio. Asumir con sus propios recursos gastos de un contrato de Fiducia en particular constituye una práctica insegura y una operación no autorizada en la medida que desborda la capacidad legal de la fiduciaria por lo tanto por todas las razones expresadas no puede acceder a conciliar contrario a la ley.

5. Que la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado reiteradamente sobre la responsabilidad del fiduciario en un contrato de fiducia, en los siguientes términos: “en consecuencia, no se identifica jurídicamente el fiduciario cuando actúa en su órbita propia como persona jurídica, a cuando lo hace en virtud del encargo que emana de la constitución de la fiducia mercantil, ni se confunde bajo ningún respecto con el patrimonio Autónomo, ostentando su propia personificación, singularidad e individualización normativa, patrimonio, habilidad dispositiva y responsabilidad”

6. Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Fiduprevisora S.A, tal como lo consigno en la carta de 1º de septiembre de 2009, se ha abstenido de pronunciarse en los casos en que no se le demande directamente por sus actuaciones propias, sino por su condición de vocero de patrimonios autónomos, casos en los cuales la responsabilidad patrimonial, a la luz de las normas del Código de Comercio, recae sobre bienes y activos fideicomitidos y corresponde a los fideicomitentes definir la pertinencia o no de un acuerdo en esa materia.

POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Los Miembros del Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander acordaron por unanimidad señalar como política NO CONCILIAR frente a los casos que traten sobre solicitudes de prestaciones sociales reconocidas a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el siguiente concepto: “por disposición expresa de la Ley 91 de 1989, el Decreto 1775 de 1990 y el Decreto 2831 de 2005, la competencia para dar visto bueno que apruebe o niegue las solicitudes realizadas ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponden a la Fiduprevisora S.A en calidad de administrador fiduciario de los recursos del fondo, señalándose a su vez que los actos



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 12 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|

administrativos que contradigan estas disposiciones, es decir las resoluciones o actos administrativos que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de la tal fondo carecerán de efectos legales y no prestaran merito ejecutivo”

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los casos que nos ocupan no se considera pertinente plasmar concepto jurídico toda vez que existe **POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.**

Cabe precisar que los concepto jurídicos no son obligatorios jurídicamente, ya que se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para los miembros del comité de conciliación, de allí que los integrantes del mismo; a quienes les corresponda tomar una decisión, la toman aplicando su propio criterio.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, Y MANTENER LA POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Los Miembros del Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander acordaron por unanimidad señalar como política **NO CONCILIAR** frente a los casos que traten sobre solicitudes de prestaciones sociales reconocidas a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el siguiente concepto: “por disposición expresa de la Ley 91 de 1989, el Decreto 1775 de 1990 y el Decreto 2831 de 2005, la competencia para dar visto bueno que apruebe o niegue las solicitudes realizadas ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponden a la Fiduprevisora S.A en calidad de administrador fiduciario de los recursos del fondo, señalándose a su vez que los actos administrativos que contradigan estas disposiciones, es decir las resoluciones o actos administrativos que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de la tal fondo carecerán de efectos legales y no prestaran merito ejecutivo”

3. **Solicitud de conciliación extrajudicial de ARMANDO CASSIANI SANTAMARÍA.**

Expone el caso el Dr. Oscar Mauricio Hinestroza, abogado de la Secretaría de Educación.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|---|---------------------------|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OSCAR MAURICIO HINESTROZA |



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión: 2 | Pág. 13 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|------------|---------------|

| | |
|--|--|
| | ARIZA |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | CUANTIA |
| ARMANDO CASSIANI SANTAMARIA | |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | NACION MINSITERIO DE EDUCACION NACIONAL – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA S.A |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| ACCIÓN JUDICIAL: | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | NO OPERA LA CADUCIDAD POR SER PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |

1. HECHOS RELEVANTES

- Mediante petición con radicado web 2011-PENS-002162 de fecha 16-02-11 el convocante y sus hijos DIEGO ARMANDO CASSIANI BARRAZA y LAURA VANESSA CASSIANI BARRAZA, solicitaron el reconocimiento y pago de la PENSION POST MORTEM 18 AÑOS DE YOLANDA BARRAZA DELGADO (Q.E.P.D.).
- Que mediante Resolución No.560 del 05/25/2011 se negó el reconocimiento de una pensión post-mortem 18 años de YOLANDA BARRAZA DELGADO (Q.E.P.D.).
- A través de apoderado el cónyuge superviviente solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

2. PRETENSIONES

- El apoderado de la parte convocante pretende se declare la nulidad de la Resolución No.560 del 05/25/2011.
- Que como consecuencia se ordene a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER-SECRETARIA DE EDUCACION



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión. 2 | Pág 14 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|

DEPARTAMENTAL-FONDO REGIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES-FIDUPREVISORA S.A., reconozcan y paguen la pensión de sobrevivientes.

- Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la NACION-MINISTERIO DE EDUCACION- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER-SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL-FONDO REGIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES-FIDUPREVISORA S.A., a efectuar el pago de las mesadas causadas desde el momento en que tuvieron lugar, hasta el momento en que se haga efectivo el pago de la prestación.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico consiste en determinar si el acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes debe ser declarado nulo y en su lugar reconocer la prestación reclamada por el convocante.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

- CAPACIDAD JURIDICA: La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar se las personas que intervienen en el trámite conciliatorio están legitimadas o cuentan con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente

- Dentro de la convocatoria no se adjunta copia del poder

- Las pruebas que relaciona y pretende hacer valer el apoderado de la parte convocante son:

- Copia del Derecho de petición presentado ante el fondo de prestaciones sociales del magisterio
- Copia de la Resolución Mediante la cual se realizó el reconocimiento de la pensión de jubilación

- **REFERENTE O PRECEDENTE**

No procede el reconocimiento de la prestación por cuanto la pensión post mortem 18 años requiere que el afiliado que fallece habiendo cumplido 18 años de servicio oficial continuo o discontinuo sin importar la edad.

Según certificado de tiempo de servicio el docente laboró desde el 2003-03-17 hasta 2008-02-29 retirado del servicio con resolución 2359 de 2008-03-17 con efectos fiscales desde 2008-03-01 para un total de tiempo laborado de 1.785 días.

CONCLUSIONES

Con fundamento en las razones expuestas no le asiste derecho alguno y por lo mismo no procede la conciliación.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 15 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

Para el caso que nos ocupa no se considera pertinente plasmar concepto jurídico toda vez que existe POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Cabe precisar que los concepto jurídicos no son obligatorios jurídicamente, ya que se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para los miembros del comité de conciliación, de allí que los integrantes del mismos; a quienes les corresponda tomar una decisión, la toman aplicando su propio criterio.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, Y MANTENER LA POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Los Miembros del Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander acordaron por unanimidad señalar como política NO CONCILIAR frente a los casos que traten sobre solicitudes de prestaciones sociales reconocidas a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el siguiente concepto: “por disposición expresa de la Ley 91 de 1989, el Decreto 1775 de 1990 y el Decreto 2831 de 2005, la competencia para dar visto bueno que apruebe o niegue las solicitudes realizadas ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponden a la Fiduprevisora S.A en calidad de administrador fiduciario de los recursos del fondo, señalándose a su vez que los actos administrativos que contradigan estas disposiciones, es decir las resoluciones o actos administrativos que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de la tal fondo carecerán de efectos legales y no prestaran merito ejecutivo”

4. Solicitud de conciliación extrajudicial de MARIA CONSUELO RAMIREZ VALLEJO.

Expone el caso el Dr. Oscar Mauricio Hinestroza, abogado de la Secretaría de Educación del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|--|--|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OSCAR MAURICIO HINESTROZA ARIZA |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | CUANTIA |
| MARIA CONSUELO RAMIREZ VALLEJO | DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |



| | | | | |
|---|--|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión. 2 | Pág 16 de 59 |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | NACION MINSITERIO DE EDUCACION NACIONAL – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMETNAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA S.A | | | |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) | | | |
| ACCIÓN JUDICIAL: | REPARACION DIRECTA | | | |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | NO OPERA LA CADUCIDAD POR SER PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO | | | |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | | | | |

1. HECHOS RELEVANTES

- Mediante Resolución No.11001 del 09/10/2007 se retira del servicio a un docente por invalidez.

A través de apoderado la docente pensionada solicita se haga el reconocimiento de la indemnización por laringitis crónica-disfonía por uso y abuso de voz.

2. PRETENSIONES

- El apoderado de la parte convocante pretende que se declare a la NACION MINSITERIO DE EDUCACION NACIONAL – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMETNAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA S.A, administrativamente y extracontractualmente responsables, de la totalidad de los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados a su poderdante por habersele ocasionado una enfermedad profesional enn el tiempo que laboró como docente al servicio de la administración departamental.
- Que se condene a pagar a los accionados la suma de doscientos salarios mínimos por concepto de perjuicios extrapatrimoniales sufridos por su mandante.
- Que se condene a pagar a los accionados la suma de cincuenta salarios mínimos por concepto de perjuicios patrimoniales sufridos por su mandante.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO



| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág 17 de 59 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|

El problema jurídico consiste en determinar si los entes convocados son responsables de los daños y perjuicios sufridos por la demandante al adquirir laringitis crónica- disfonía por uso y abuso de voz.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

- **CAPACIDAD JURIDICA:** La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar se las personas que intervienen en el trámite conciliatorio están legitimadas o cuentan con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente
- Dentro de la convocatoria se adjunta copia del poder
- Las pruebas que relaciona y pretende hacer valer el apoderado de la parte convocante son:
 - Copia de la calificación de pérdida de capacidad laboral expedida por Avanzar Médico de fecha agosto 2 de 2007.
 - Copia de la calificación de pérdida de capacidad laboral expedida por Avanzar Médico de fecha agosto 2 de 2007, Primera Instancia.
 - Copia de la Resolución No. 0398 de abril 3 de 2008 mediante la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de invalidez a un docente nacionalizado.
 - Copia del diagnóstico médico del Instituto del Sistema Nervioso del Oriente S.A.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los perjuicios pretendidos no se encuentran debidamente probados, por lo tanto no es procedente la conciliación.

Cabe precisar que los concepto jurídicos no son obligatorios jurídicamente, ya que se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para los miembros del comité de conciliación, de allí que los integrantes del mismos; a quienes les corresponda tomar una decisión, la toman aplicando su propio criterio.

DECISION DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, en razón a que no hay nexo de causalidad, entre lo que la accionante pretende que se le reconozca y las pruebas que sustentan su solicitud; Así las cosas y atendiendo a que los perjuicios pretendidos no se encuentran debidamente probados, no es procedente la conciliación

5. Solicitud de conciliación extrajudicial de NELCY SOBEIDA PEÑA DE GARCÍA Y OTROS.

Expone el caso el Dr. Oscar Hinestroza, abogado de la Secretaría de Educación del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código. AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión: 2 | Pág. 18 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

| | |
|--|--|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OSCAR MAURICIO HINESTROZA ARIZA |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | CUANTIA |
| NELCY SOBEIDA PEÑA DE GARCIA | \$18.010.825 |
| MARIA DEL CARMEN PINZON DE PINZON | \$18.182.147 |
| EDGAR JOSE CARREÑO GORDILLO | \$18.730.200 |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | NACION MINSITERIO DE EDUCACION NACIONAL – SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y FIDUPREVISORA S.A |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| ACCIÓN JUDICIAL: | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | NO OPERA LA CADUCIDAD POR SER PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |

1. HECHOS RELEVANTES

- Mediante Resolución No.1085 A del 06/23/2006 se reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación a la docente NELCY SOBEIDA PEÑA DE GARCIA.
- A través de derecho de petición la docente solicito el ajuste de la pensión mediante inclusión de factores salariales en el reconocimiento de la pensión de jubilación.
- Mediante oficio 03.0.4.3-4198-09 de noviembre 27 de 2009 la coordinadora del fondo de prestaciones sociales del magisterio señala que no es posible la inclusión de factores salariales "...partiendo de los parámetros legales existentes y teniendo



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Version 2 | Pág. 19 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|

en cuenta que usted adquirió el status de pensionado durante el periodo en el cual se encontraba vigente el artículo 3 del decreto 3752 de 2003 se mantienen inmodificables por ser situaciones jurídicas consolidadas y respecto de las cuales la ley 1151 de 2007, no estableció modificación alguna”.

2. PRETENSIONES

- El apoderado de la parte convocante pretende la nulidad del acto administrativo 03.0.4.3-4198-09 del 27 de noviembre de 2009 a través del cual se decidió desfavorablemente el derecho de petición impetrado por la convocante NELCY SOBEIDA PEÑA DE GARCIA quien solicitaba la reliquidación de la pensión de jubilación por nuevos factores salariales.
- Declara que en virtud de la ley los convocantes tienen derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en cuantía equivalente al promedio del salario, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados a partir de la acreditación del status pensional.
- Condenar a las entidades accionadas a aumentar el valor de la pensión teniendo en cuenta los incrementos porcentuales establecidos por el Gobierno Nacional, en la suma liquidada sobre todos los factores salariales devengados y acreditados, desde la fecha en que adquirió el status de pensionado hasta cuando se verifique la inclusión en nomina del nuevo valor reconocido.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico consiste en determinar si el acto administrativo así como los actos fictos o presuntos acusados al generar una respuesta negativa deben declararse nulos y en su lugar proceder a realizar la inclusión de los factores salariales devengados por los demandantes durante el año anterior al cumplimiento del status pensional.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

- CAPACIDAD JURIDICA: La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar se las personas que intervienen en el trámite conciliatorio están legitimadas o cuentan con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente
- Dentro de la convocatoria se adjuntan copias de los poderes.
- Las pruebas que relaciona y pretende hacer valer el apoderado de la parte convocante son:
 - Copia de los derechos de petición presentados ante el fondo de prestaciones sociales del magisterio.



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 20 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|

- Copia del Oficio 03.0.4.3-4198-09 emanado del fondo de prestaciones sociales del magisterio a través del cual se niega la petición de NELCY SOBEIDA PEÑA DE GARCIA.

REFERENTE O PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO MEDIANTE LA CUAL SE UNIFICO
DE CRITERIO FRENTE A LA INCLUSIÓN DE FACTORES SALARIALES
EN MATERIA PENSIONAL

Sentencia de 4 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-25-000-2006-7509-01(0112-09). MP. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILLA. Acción de nulidad y restablecimiento, que corresponde a Sentencia de UNIFICACIÓN proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo del Estado, con salvamento de voto del Dr. Gerardo Arenas Monsalve se señala:

Los factores que constituyen el ingreso base de liquidación en la Leyes 33 y 62 de 1985, tienen carácter enunciativo y no taxativo, y por tanto no impide la inclusión de otros factores salariales devengados en el último año de servicios, así no se haya hecho el respectivo descuento, en consideración:

- a) La interpretación taxativa vulnera el principio de progresividad

De la normatividad anterior a la expedición de la Ley 33 de 1985, tal como ocurre en el caso del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, se observa que los factores salariales que debían tenerse en cuenta para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación eran superiores a los ahora enlistados por la primera de las citadas normas, modificada por la Ley 62 de 1985; aún así, también de dicho Decreto se ha predicado que no incluye una lista taxativa sino meramente enunciativa de los factores que componen la base de liquidación pensional, permitiendo incluir otros que también fueron devengados por el trabajador. La Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquella enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.

- b) La Interpretación taxativa vulnera el principio de igualdad

El artículo 53 de la Constitución Política, en virtud del cual en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho ha de optarse por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios. Es por ello que la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional, sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 21 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

c) La interpretación taxativa vulnera el Principio de la realidad sobre las formalidades.

En atención al citado precedente, es preciso aclarar que, la Sala no desconoce la competencia radicada por la Constitución Política en cabeza del legislador y el ejecutivo respecto de la regulación de las prestaciones sociales de los empleados públicos; sin embargo, dada la redacción de la disposición analizada, a saber la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiando su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.

d) la interpretación taxativa no vulnera el Principio de Protección del Erario Público

Si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de Ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar. En este orden de ideas, la protección al erario público es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los cuales la Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra efectivizar ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de ellos, toda vez que, como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del Estado Social de Derecho.

e) En la Liquidación de la pensión de jubilación debe tenerse en cuenta todos los factores que constituyen salario.

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando. Sentencia que ya fue acogida por los Juzgados Administrativos y Tribunal Administrativo de Santander, además de otra parte y en aras de dar cumplimiento a la normatividad jurídica preexistente me permito transcribir el artículo 114 de la Ley 1395 en el cual se señala "Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores afiliados..., para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en materia



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 22 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

ordinaria o contencioso administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos”.

- Se hace imposible verificar por parte de esta secretaria si existe referente o precedente jurisprudencial relacionando las sentencias favorables o en contra de la entidad relacionada con los hechos de la solicitud de conciliación, toda vez que quien asume la defensa judicial del Departamento es la oficina jurídica. Por tanto y acorde con la guía de estudio de las solicitudes de conciliación extrajudicial “.... Las oficinas jurídicas o dependencias que hagan sus veces, deben diseñar e implementar un banco de fallos y de precedentes jurisprudenciales temáticos que contemple el acopio de las diferentes providencias favorables o condenatorias contra la entidad y los respectivos documentos o estudios jurídicos que analicen los fallos agrupados por temas de mayor conflictividad de la entidad...”

CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Analizados los antecedentes administrativos y legales, los miembros del Comité de conciliación del Ministerio de Educación Nacional adoptaron la decisión de actualizar la Política General de Conciliación Extrajudicial, para la participación de sus apoderados en las audiencias de Conciliaciones Judiciales y Extrajudiciales a que éste convocado, del siguiente tenor:

“En las audiencias de conciliación prejudicial y judicial a que se convoque por litigios en los que se debate reconocimiento y pago de prestaciones sociales e igualmente prestación de servicios de salud a los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO se deberá llamar en garantía a la entidad territorial que expidió el acto administrativo objeto de la litis o la que deba por competencia efectuar reconocimiento de prestaciones y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como titular y vocera del patrimonio autónomo en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito entre la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION y dicha entidad como consta en la escritura pública 0083 del 21 de junio de 1990, para que sean estas las entidades que coordinadamente estudien y viabilicen o no la conciliación respecto de las pretensiones del demandado o solicitante en cada caso de conformidad con el art. 56 de la Ley 962 de 2005 en concordancia con el decreto 2831 de 2005”

CONCLUSIONES

- Dada la descentralización del sector educativo en virtud de la Ley 60 de 1993 y posteriormente la Ley 715 de 2001, este Ministerio perdió la facultad de ser nominador, facultad que fue trasladada a los Departamentos, Distritos y los Municipios certificados, correspondiendo la administración del personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales a los Gobernadores y Alcaldes respectivos.
- Las funciones que ejercían los Representantes de la Ministra de Educación Nacional ante las entidades territoriales en relación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio conforme a los artículos derogados por el artículo 61, se



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 23 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

encuentran en cabeza de las Secretarías de Educación en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005 (artículo 56), reglamentados en lo pertinente por el Decreto 2831 de 2005.

CONCEPTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA FIDUPREVISORA S.A

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE JURIDICO Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DE LA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICA

1. Que Fiduciaria la Previsora es una entidad de servicios financieros, cuyo objeto social exclusivo es la celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las Sociedades Fiduciarias, por normas generales y por normas especiales esto es, la realización de los negocios fiduciarios, tipificados en código de comercio y previstos en el estatuto orgánico del sector financiero como en Estatuto de Contratación de la Administración Pública, al igual que en las disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten las anteriormente detalladas y NO el reconocimiento de derechos sociales de carácter prestacional.
2. Que el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son manejados en la actualidad por Fiduciaria la Previsora S.A., la cual actúa como representante y vocera del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en razón del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública No. 0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaria 44, prorrogado sucesivamente y a la fecha vigente, celebrado con la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
3. Que Fiduciaria la Previsora S.A solo actúa en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en dicha calidad solo está obligada a pagar las prestaciones dentro del marco de la ley.
4. Que de la misma manera las fiduciarias como la FIDUPREVISORA S.A., deben atender la obligación de salvaguardar su propio patrimonio como prenda general de sus acreedores, de manera que no puedan comprometerlo parcial ni totalmente en un negocio determinado, asumiendo gastos inherentes a un contrato de fiducia en particular con cargo a su propio peculio. Asumir con sus propios recursos gastos de un contrato de Fiducia en particular constituye una práctica insegura y una operación no autorizada en la medida que desborda la capacidad legal de la fiduciaria por lo tanto por todas las razones expresadas no puede acceder a conciliar contrario a la ley.
5. Que la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado reiteradamente sobre la responsabilidad del fiduciario en un contrato de fiducia, en los siguientes términos: “en consecuencia, no se identifica jurídicamente el fiduciario cuando actúa en su



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión 2 | Pág 24 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|

órbita propia como persona jurídica, a cuando lo hace en virtud del encargo que emana de la constitución de la fiducia mercantil, ni se confunde bajo ningún respecto con el patrimonio Autónomo, ostentando su propia personificación, singularidad e individualización normativa, patrimonio, habilidad dispositiva y responsabilidad”

6. Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Fiduprevisora S.A, tal como lo consigno en la carta de 1º de septiembre de 2009, se ha abstenido de pronunciarse en los casos en que no se le demande directamente por sus actuaciones propias, sino por su condición de vocero de patrimonios autónomos, casos en los cuales la responsabilidad patrimonial, a la luz de las normas del Código de Comercio, recae sobre bienes y activos fideicomitidos y corresponde a los fideicomitentes definir la pertinencia o no de un acuerdo en esa materia.

POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Los Miembros del Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander acordaron por unanimidad señalar como política NO CONCILIAR frente a los casos que traten sobre solicitudes de prestaciones sociales reconocidas a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el siguiente concepto: “por disposición expresa de la Ley 91 de 1989, el Decreto 1775 de 1990 y el Decreto 2831 de 2005, la competencia para dar visto bueno que apruebe o niegue las solicitudes realizadas ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponden a la Fiduprevisora S.A en calidad de administrador fiduciario de los recursos del fondo, señalándose a su vez que los actos administrativos que contradigan estas disposiciones, es decir las resoluciones o actos administrativos que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de la tal fondo carecerán de efectos legales y no prestaran merito ejecutivo”

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para los casos que nos ocupan no se considera pertinente plasmar concepto jurídico toda vez que existe POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Cabe precisar que los concepto jurídicos no son obligatorios jurídicamente, ya que se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para los miembros del comité de conciliación, de allí que los integrantes del mismos; a quienes les corresponda tomar una decisión, la toman aplicando su propio criterio.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 25 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

DECISION DEL COMITÉ: NO CONCILIAR Y MANTENER LA POLÍTICA ADOPTADA POR LOS MIEMBROS DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER FRENTE A LOS CASOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Los Miembros del Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander acordaron por unanimidad señalar como política NO CONCILIAR frente a los casos que traten sobre solicitudes de prestaciones sociales reconocidas a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo el siguiente concepto: "por disposición expresa de la Ley 91 de 1989, el Decreto 1775 de 1990 y el Decreto 2831 de 2005, la competencia para dar visto bueno que apruebe o niegue las solicitudes realizadas ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponden a la Fiduprevisora S.A en calidad de administrador fiduciario de los recursos del fondo, señalándose a su vez que los actos administrativos que contradigan estas disposiciones, es decir las resoluciones o actos administrativos que se expidan por parte de la autoridad territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sin la previa aprobación de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de la tal fondo carecerán de efectos legales y no prestaran merito ejecutivo"

6. Solicitud de conciliación extrajudicial de EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ.

Expone el caso el Dr. Oscar Hinestroza, abogado de la Secretaría de Educación del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|--|---|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OSCAR MAURICIO HINESTROZA ARIZA |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | CUANTIA |
| EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ | \$4.000.000.00 |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| ACCIÓN JUDICIAL: | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | NO OPERA LA CADUCIDAD POR SER PRESTACIONES DE TRACTO SUCESIVO |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión: 2 | Pág. 26 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

1. HECHOS RELEVANTES

La señora EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ desde el 14 de mayo de 2003 hasta el 19 de diciembre de 2003, fue vinculada al servicio docente oficial en un establecimiento educativo oficial en el Departamento de Santander, mediante contrato de prestación de servicios.

2. PRETENSIONES

Que como consecuencia del hecho relevante, el apoderado de la señora EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ solicita a la entidad convocada el reconocimiento y pago de prestaciones sociales como son cesantías, intereses de cesantía, auxilio de transporte, prima de alimentación, prima de navidad, vacaciones remuneradas, subsidio familiar, dotación de calzado y vestido, a que tenga derecho conforme a las normas vigentes.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO

El problema jurídico consiste en determinar si el Departamento de Santander debe reconocer las prestaciones sociales y demás emolumentos solicitados por el apoderado de la accionante.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

CAPACIDAD JURIDICA: La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar si las personas que intervienen en el trámite conciliatorio están legitimadas o cuentan con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente

Dentro de la convocatoria no se adjunta copia del poder

Las pruebas que pretende hacer valer el apoderado de la parte convocante no fueron allegadas.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En razón a que el vínculo de la señora EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ con el Departamento de Santander fue a través de contrato de prestación de servicios, no es procedente conciliar prestaciones sociales y otros emolumentos ya que ello sólo procede para las personas que se vinculan a través de designación de libre nombramiento o en provisionalidad más no aplica para los contratos.

Cabe precisar que los concepto jurídicos no son obligatorios jurídicamente, ya que se trata de una opinión, apreciación o juicio, que por lo mismo se expresa en términos de conclusiones, sin efecto jurídico directo sobre la materia de qué trata, que sirve como simple elemento de información o criterio de orientación, en este caso, para los miembros del comité de conciliación, de allí que los integrantes del mismos; a quienes les corresponda tomar una decisión, la toman aplicando su propio criterio.



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 27 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|

DECISION DEL COMITÉ: NO CONCILIAR En razón a que el vínculo de la señora EMELDA CARVAJAL HERNANDEZ con el Departamento de Santander fue a través de contrato de prestación de servicios, no es procedente conciliar prestaciones sociales y otros emolumentos ya que ello sólo procede para las personas que se vinculan a través de designación de libre nombramiento o en provisionalidad más no aplica para los contratos.

B. SECRETARIA GENERAL

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de LIPSAMIA RENDON CROSS.

Expone el caso el Dr. Eliecer Delgado Jimenez, abogado de La Oficina de Personal del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|---|---|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | Por definir |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | EDIMAR ALFONZO ORTIZ AREVALO (actuando en nombre y representación de Lipsamia Rendón Cross). |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | DEPARTAMENTO DE SANTANDER (Gobernador de Santander) |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría Delegada Ante Juez Administrativo |
| VALOR DE LAS PRETENSIONES, O ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA: | Valor aproximado \$ 17.394.188 |
| ACCIÓN JUDICIAL: | ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | 8 DE MARZO DE 2012 La insubsistencia se surtió el 2 de noviembre y se notifico el 8 hay vacancia judicial de 22 días calendario. |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | caducidad art.3 Dec.1716/09) |



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 28 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|

1.-HECHOS RELEVANTES:

El apoderado de la parte convocante manifiesta los siguientes hechos en la solicitud de conciliación:

1.- La demandante LIPSAMIA RENDON CROSS estuvo vinculada a la Gobernación de Santander desde el 20 de mayo de 2004 en provisionalidad en el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código 219 Grado 12, en la división de referencia en salud de la secretaria de salud y a través de la Resolución No. 15171 del 19 de septiembre de 2011, el entonces gobernador de Santander le declaro insubsistente.

2.- El empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código 219 Grado 12 del nivel profesional de la división Referencia en Salud de la Secretaria de salud- Gobernación de Santander fue reportado como vacancia definitiva a la Comisión Nacional del Servicio Civil y en consecuencia fue ofertado en la oferta pública de empleos de Carrera OPEC de la convocatoria 001 de 2005, identificado con el numero OPEC 1011, para lo cual la doctora. LIPSAMIA RENDON CROSS en calidad de servidor en provisionalidad adelanto el proceso de inscripción y registro en la convocatoria 001 de 2005 adquiriendo el PIN 001587771575, presentando y aprobando la prueba básica general de preselección.

3.- El Congreso de la Republica, expidió el Acto Legislativo No. 01 del 26 de diciembre de 2008 adicionando un párrafo transitorio al artículo 125 de la Constitución Política, el cual contemplo una excepción a la regla general que propugna por el acceso al servicio público a través del concurso de meritos y dispuso un sistema de ingreso automático a la Carrera Administrativa sin previo concurso, para los funcionarios que para la fecha de publicación de la ley 909 de 2004- publicada el 23 de septiembre- se encontraban en cargos de carrera en vacancia definitiva mediante nombramiento en provisionalidad; dicho Acto Legislativo, fue declarado inexecutable por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-588 de 2009.

4.- LIPSAMIA RENDON CROSS, por considerar que reunía los requisitos señalados en el Acto Legislativo 01 de de 2008, el 24 de julio presento petición de inscripción extraordinaria en Carrera Administrativa, según consta en formulario presentado ante la entidad nominadora y como quiera que al momento de la promulgación del Acto Legislativo ya había culminado la primera fase del concurso que la poderdante había aprobado, asistiéndole el derecho a continuar en el concurso y a que se suspendiera la convocatoria No. 001 respecto al cargo que venía ocupando.

5.-Con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2008, surgió para los representantes legales de las entidades nominadoras objeto de la convocatoria 001 de 2005, el deber de informar a la Comisión Nacional del servicio Civil, los empleos ocupados por los servidores a quienes le asistía el derecho a ingresar automáticamente a la carrera administrativa, a fin de retirarlos de la oferta pública de empleos de carrera y en consecuencia correspondía al entonces gobernador de Santander informar el retiro del empleo que venía desempeñando la señora Lipsamia Rendón Cross.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código. AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág. 29 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|

6.-La Comisión Nacional del Servicio Civil, realizó las siguientes actuaciones: conforme lista de elegible mediante resolución 3168 del 14 de junio de 2011, con auto 447 del 14 de septiembre de 2011 publico firmeza de la lista de elegibles para el empleo OPEC 10111 a partir del 21 de julio de 2011, en cumplimiento al fallo de tutela de primera instancia proferido por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogotá, en el marco de de la acción de tutela interpuesta por la señora Edith Verence Sanabria Delgado.

7.-La Gobernación de Santander, Expidió los siguientes actos administrativos: resolución 15171 del 19 de septiembre nombrando en periodo de prueba a Edith Verence Sanabria Delgado en el empleo profesional universitario código219, grado 12 de la división Referencia en salud de la secretaria de salud – Gobernación de Santander y como consecuencia de este nombramiento se entiende declarado insubsistente automáticamente, el nombramiento en provisionalidad de Lipsamia Rondón Cross, a partir de la posesión de la persona nombrada, la cual se surtió a partir del 2 de noviembre de 2011.

Manifiesta la parte convocante, que con el actuar desplegado por el entonces gobernador de Santander, se le desconoció el derecho que le asistía a la señora Lipsamia Rondón Cross a no continuar en el concurso de meritos ya que se suspendiera la convocatoria 001 de 2005, respecto al cargo que venía ocupando , por haber aplicado a la inscripción automática en carrera administrativa a que se refería el acto Legislativo 01 de 2008 , con el cual resultado afectada en su derecho fundamental a la igualdad, en cuanto se le impidió injustificadamente acceder a la Carrera administrativa en el cargo que venía desempeñando en la gobernación de Santander en igualdad de condiciones, el cual es uno de los componentes esenciales del artículo 125 de la Constitución Política; así mismo manifiesta, que existió una flagrante vulneración al derecho al debido proceso y al derecho al a igualdad.

2.- PRETENSIONES: La parte convocante solicita lo siguiente:

“1.-) El reintegro de mi mandante al mismo cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría o que se cree para efectos de cumplir con el acuerdo conciliatorio. 2.- El pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla el acuerdo conciliatorio, con la correspondiente indexación. 3.-) Que se declare que no hubo solución de continuidad.

3.- ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION: NORMAS DE RANGO CONSTITUCIONAL:

Artículo 125 de Nuestra Constitución Política preceptúa:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 30 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. (Negrilla fuera de texto).

Así mismo, la Constitución Política establece en su artículo 130 lo siguiente: “Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.”

• **LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA DENTRO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA:**

El artículo 27 de la ley 909 de 2004 preceptúa:

“La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”. (Negrilla fuera de texto)

El artículo 29 de la citada ley señala:

“Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas la personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño”. (Negrilla fuera de texto).

El artículo 30 de la ley 909 de 2004 preceptúa:

“Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para tal fin, Los costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos. (Negrilla fuera de texto)

Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual éste ubicada la entidad para la cual se realiza el concurso....”.

El artículo 31 de la ley 909 de 2004 establece:

“El proceso de selección comprende:

Convocatoria (...) 2. Reclutamiento (...) 3. Pruebas (...) 4.- Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquélla, elaborará con estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.”.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión: 2 | Pág. 31 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

Sustentado en lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en razón de su competencia llevo a cabo la Convocatoria 001 de 2005 para surtir el proceso de selección a través de concurso de méritos, a fin de proveer los empleos vacantes y provistos en provisionalidad.

Así mismo, mediante Circular conjunta 074 del 21 de octubre de 2009 suscrita por el doctor ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación y la doctora LUZ PATRICIA TRUJILLO MARIN Presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, solicitaron a los representantes legales de las entidades territoriales que aún no han enviado o no han actualizado la información relativa a la oferta pública de los empleos de carrera OPEC, reportar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva, incluidos los provistos a la fecha con nombramientos provisionales, indicando en este último caso el día de posesión de los servidores que los ocupan. Igualmente manifiestan que la omisión de esta obligación legal puede acarrear sanción disciplinaria al representante legal o quien haga sus veces, en aplicación del Código Único disciplinario ley 734 de 2002.

Igualmente, la circular 053 de 27 de octubre de 2009 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, informa a todos los representantes legales de las entidades objeto de la convocatoria Número 001 de 2005 el cumplimiento de la circular conjunta Número 074 del 21 de octubre de 2009 emitida por la Procuraduría General de la Nación y la CNSC, que con anterioridad al 7 de diciembre de 2009 debían reportar los empleos de carrera administrativa con vacancia definitiva provistos en cualquier modalidad o que se encuentren vacantes.

Por tanto la Administración Departamental, procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, consolidando el reporte de los empleos a la OPEC – CNSC.

En consecuencia, y posterior al proceso de concurso de méritos según convocatoria 001 de 2005 y al cumplimiento de todas las etapas de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha proferido resoluciones mediante las cuales se conforman listas de elegibles. Una de estas la resolución número 3168 de fecha 14 de junio de 2011 para proveer la vacante en el cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 12 el cual ocupaba LIPSAMIA RENDON CROSS, acto administrativo que adquiere firmeza a partir del 7 de julio de 2011, pero que posteriormente la CNSC detiene su firmeza a partir del 11 de julio de 2011 con ocasión del la promulgación del Acto Legislativo 04 del 7 de julio de 2011; posterior a esta decisión con fecha 15 de septiembre de 2011 se publican los empleos que cobran firmeza en cumplimiento a fallo proferido por autoridad judicial encontrándose la Resolución 3168 de junio 14 de 2011 el empleo 10111 se publica la firmeza a partir del 21 de junio de 2011 en cumplimiento a fallo de primera instancia proferido por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el marco de la acción de tutela interpuesta por la señora EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO, la cual fue cumplida por la CNSC mediante auto 0447 del 14 de septiembre de 2011.

Valga precisar, que el Acuerdo número 025 de julio 18 de 2008 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil en su artículo 7 contempla:

“Provisión de Cargos con las listas de elegibles. En firme la lista de elegibles, la Comisión Nacional del Servicio Civil informará a los representantes legales de la entidades para las



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión. 2 | Pág 32 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|

cuales se realizó el concurso, el nombre de identificación de los elegibles con quienes deben proveerse los empleos, para que en un término no superior a diez (10) días contados a partir del recibo de la comunicación, se produzcan los respectivos nombramientos en periodo de prueba. (Negrilla fuera de texto).

Parágrafo. En firme la listas de elegibles, los cargos objeto de concurso sólo podrán proveerse mediante nombramiento en periodo de prueba.” (Negrilla fuera de texto).

De acuerdo a lo precedente, la Administración Departamental expidió la Resolución número 15171 del 19 de septiembre de 2011 por medio de la cual en su artículo segundo se nombro en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa al elegible EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO identificada con cédula de ciudadanía número 46.671.513 para desempeñar el cargo de Profesional universitario, Nivel profesional Código 219 Grado 12 de la División Referencia en Salud la planta de cargos de la secretaria de salud – Gobernación de Santander. En consecuencia, en el artículo cuarto como resultado del nombramiento establecido en el artículo segundo de la referida resolución, se entenderá declarado insubsistente automáticamente el nombramiento de LIPSAMIA RENDON CROSS quien se desempeñaba en el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, NIVEL PROFESIONAL, Código 219 grado 12, una vez EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO tome posesión del empleo para el cual fue nombrado.

En este orden de ideas resulta oportuno traer a colación lo señalado en la Circular número 002 de 2011, suscrita por el doctor Fridole Ballen Duque, en su calidad de Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio de la cual comunica a todas las entidades de efectuar los nombramientos en estricto orden de mérito en virtud de las listas de elegibles expedidas por la CNSC. Y la cual en uno de sus apartes señala lo siguiente: “Por último, es importante recordar que de conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 12 de la ley 909 de 2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los servidores públicos de la entidades nacionales y territoriales sanciones de multa, cuando previamente y garantizando el debido proceso se compruebe la violación de las normas de carrera administrativa o la inobservancia de la ordenes o instrucciones impartidas por ella”. (Negrilla fuera de texto).

Las entidades del sector público solo cumplen con lo establecido en la lista de elegibles contenidas en actos administrativos proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil que son los resultados de las pruebas, toda vez que este organismo, la elabora en estricto orden de mérito, cubriendo las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.

Cabe anotar que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, entre las cuales se puede citar la Sentencia T007 de 2008, en relación con los empleos provisionales ha señalado: “La corte reconoce que no existe para los funcionarios que ocupan cargos de carrera administrativa en provisionalidad, un fuero de estabilidad como el que le corresponde a quienes están debidamente inscritos en carrera administrativa y han sido elegidos mediante concurso. Sin embargo esta Corporación estima que para los primeros existe “un cierto grado de protección”, que consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo que ocupan, sino por causas disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones expresas atinentes al servicio o por designación por concurso de quien gano la plaza, conforme a la regla constitucional general relativa con la provisión de los empleos de carrera (artículo 125 Constitución Política de Colombia).



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 33 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|

LIBERALIDAD DEL CONCURSANTE O ASPIRANTE DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS:

Todo aspirante al concurso de méritos de conformidad con la Convocatoria 001 de 2005 debía adquirir un Número de identificación Personal (PIN) es un código compuesto de 12 números y se constituye en su identificación única y exclusiva para cada aspirante, con el fin de acceder al sistema de información y conocer datos como fecha, lugar, y hora de aplicación de las pruebas así como los resultados de las mismas; además, con este PIN le permite seleccionar el empleo deseado durante la segunda fase del proceso. (Cartilla de orientación de fecha febrero de 2006 expedida por la CNSC), Por tanto el número del PIN es de carácter privado que solo tiene conocimiento cada aspirante.

De lo anterior se infiere, que el número del PIN es el enlace entre el concursante y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En consecuencia, ningún funcionario adscrito al Grupo de Administración de Personal de la Secretaria General de la Gobernación de Santander, conoce del estado en que se encuentra cada concursante, toda vez que cada uno de ellos con su número de PIN de manera discrecional escoge el cargo al cual aspira, de conformidad con la publicación de la OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de los diferentes grupos y etapas y los demás procedimientos atinentes al concurso de méritos.

La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso para los empleos de carrera administrativa, se desarrolla de acuerdo con los siguientes principios: Mérito, Libre Concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en la convocatorias podrán participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole; Publicidad. Se entiende por está la difusión efectiva de la convocatorias en condiciones que permitan ser reconocidas por la totalidad de los candidatos potenciales (Artículo 28 de la ley 909 de 2009)

En efecto la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la página web www.cnscc.gov.co, pone en conocimiento a todas las personas en igualdad de condiciones la información suministrada por este organismo, dando aplicabilidad a la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, entre otros los procedimientos para acceder a las diferentes etapas y grupos del concurso de méritos, publicación de la convocatoria, reclutamiento, la oferta pública de empleos de Carrera de todas las entidades del orden público y listas de elegibles y firmeza de las mismas.

Que existe la LIBERALIDAD O DISCRECIONALIDAD de cada concursante de aspirar a cualquier empleo ofertado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

TRAMITES CON OCASIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO NUMERO 01 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2008.

La promulgación del Acto Legislativo Número 01 de 26 de diciembre de 2008, declarado inexecutable por de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-588 de agosto 27 de 2009 con efectos retroactivos, sin duda incidió en el desarrollo de las fases del concurso que en su momento adelantaba la CNSC a través de la Convocatoria No.001 de 2005, que



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión: 2 | Pág. 34 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

para el conflicto objeto de la presente conciliación, requiere hacer un análisis de los procesos adelantados por la administración departamental y que en todo momento se soportaron en la directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y los documentos presentados por los “beneficiarios del Acto Legislativo 01 de 2008”; La Comisión Nacional del Servicio Civil emitió el acuerdo 077 de marzo 26 de 2009 fijando lineamientos generales para desarrollar la segunda fase o aplicación de pruebas de la convocatoria 001 de 2005; en ella se desarrollaron todas las condiciones generales de la fase 2 del concurso y en la que cada participante que había superado la fase uno del concurso tuvo la oportunidad de conocer información y procedimientos para continuar en la segunda fase del concurso; posteriormente la Comisión Nacional del Servicio Civil emite la circular 0048 del 4 de septiembre de 2009 en la que se indica que “ En virtud de las múltiples solicitudes elevadas a la CNSC, se requiere a las entidades que tienen empleos reportados en la OPEC, para que antes del 25 de septiembre del año en curso , indiquen aquellos empleos sobre los cuales los servidores estaban concursando en la convocatoria 001 de 2005 y que estando habilitados no continuaron en la segunda fase , por cuanto consideraban que tenían la opción de la inscripción extraordinaria . Para el efecto el lunes 7 de septiembre de 2009 se publicaran en la página web de la CNSC, el formulario que han de diligenciar con este fin.”, en cumplimiento de esta indicación, la administración departamental a través de la Coordinación de Personal, emite con carácter URGENTE la circular 024 del 8 de septiembre de 2009 en donde solicita a los funcionarios habilitados que hayan aprobado la prueba básica de la primera fase del concurso y no se hayan inscrito en la segunda fase de la convocatoria, por cuanto consideraban que tenían la opción de la inscripción extraordinaria, DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN FORMATO y allegarla a esa coordinación en un plazo perentorio hasta el 18 de septiembre, con el fin que la misma se consolide y remita a la CNSC el día 25 del septiembre de 2009.; posteriormente la CNSC emite la circular 054 del 28 de septiembre del 2009 en donde hace aclaración a la circular 053 ampliando el plazo de entrega de la información del aplicativo hasta el 7 de diciembre de 2009; en cumplimiento de estas circulares, una vez verificados los archivos de la oficina y la información de la historia laboral de la señora LIPSAMIA RENDON CROSS, no se encontró respuesta por parte de esta funcionaria a dicho requerimiento información solicitada en la circular 024 antes mencionada, como tampoco se encuentra en el reporte de los funcionarios de la secretaria de salud, presentado por la señora Gloria Ardila Parra responsable de la información en la Secretaria de Salud; por lo anterior se colige que la administración departamental si cumplió con los tramites y solicitudes de información requeridos por la Comisión Nacional del Servicio Civil soportados con la información que suministro cada funcionario, información que solo la funcionaria Lipsamia Rendón Cross, tenía el deber de demostrar acreditando que había superado la prueba de la primera fase ya que solo se conocía a través de la página de la Comisión con el número de identificación personal del PIN de cada concursante.

VIGENCIA DEL ACTO LEGISLATIVO NUMERO 04 DEL 7 DE JULIO DE 2011.

Sí bien es cierto que el acto legislativo Número 04 de 7 de Julio de 2011 establece nuevas condiciones para los empleados provisionales que lleven cinco (5) años o más en el desempeño del cargo y quienes se encuentran en encargo, y modifica las reglas respecto del concurso de méritos. En este caso específico tampoco aplicaría, puesto que el nombramiento en periodo de prueba dentro de la Carrera Administrativa del elegible EDITH VERENICE SANABRIA DELGADO, se realizó dando cumplimiento al fallo de



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 35 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

tutela 504-01, de fecha primero (1) septiembre de 2011, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Decisión Laboral de Bogotá, que ordeno a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Gobernación de Santander, continuar con el proceso de la Convocatoria 001 de 2005 que le permita a la activa acceder al nombramiento y posesión en periodo de prueba para el cargo No. 10111 de la Gobernación de Santander., quien profirió la resolución No. 15171 del 19 de septiembre y tomo posesión del empleo el día 2 de noviembre del mismo año.

De conformidad con el COMUNICADO expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil en aplicación del acto legislativo 04 del 7 de julio de 2011 señala lo siguiente: "...3.- Los elegibles que se encuentran en listas que cobraron firmeza ANTES de la promulgación del Acto Legislativo, adquirieron el derecho a ser nombrados y por tanto el nominador respectivo deberá proceder a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Decreto 1227 de 2005, es decir proferir el acto de nombramiento y dar posesión en periodo de prueba dentro de los términos previstos."

Así mismo, en la circular No. 008 del 19 de agosto de 2011 emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cual establece el Alcance y Aplicación del Acto Legislativo 04 del 7 de julio de 2011 y en uno de sus apartes manifiesta: "1.2,a.-) Los servidores con nombramiento provisional inscritos en convocatorias en curso a la fecha de promulgación del Acto Legislativo, al empleo que ocupaban al 7 de julio de 2011 y que estaban desempeñándolo el 31 de diciembre de 2010 y en el que lleven al menos cinco (5) años de ejercicio ininterrumpido, en el mismo empleo y en la misma entidad. Lo aquí señalado, sin perjuicio de la aplicación de las listas de elegibles proferidas y que adquirieron firmeza antes del 7 de julio de 2011, teniendo en cuenta que, para los elegibles se constituyó un derecho cierto frente a las vacantes existentes al momento en que las listas cobraron firmeza..."

Igualmente, en el acuerdo 162 del 5 de octubre de 2011, capítulo II Ámbito de aplicación, en su artículo 3 proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, establece: "El Acto legislativo 04 de 2011 no aplica a aquellos empleos que: a.- A la fecha de su promulgación tengan conformada lista de elegibles mediante acto administrativo en firme, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y 32 del Decreto 1227 de 2005".

CONCURSOS DE MERITOS:

Como lo ha indicado la H. Corte Constitucional. "Sentencia T-507/10. Los Concursos públicos de méritos. Reiteración Constitucional.

"3.2.1. La Corte ha entendido que la carrera administrativa es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de los fines del Estado, en cuanto favorece al darle a este "una organización adecuada que le permita alcanzarlos, con un recurso humano que no sólo sea calificado sino que pueda desarrollar su función en el largo plazo, es decir, con vocación de perdurabilidad".

3.2.2. La regla general en la carrera administrativa es que el criterio de acceso, ascenso y permanencia es el mérito de los candidatos. Así lo establece la Constitución Política en el artículo 125: "El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 36 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------|

calidades de los aspirantes". En este sentido, la Jurisprudencia de esta corporación ha determinado que la carrera administrativa se rige por principios generales que están enfocados a "la eficacia del criterio del mérito como factor definitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público."

Al respecto la Corte ha entendido que el mérito como fundamento del ingreso, ascenso y retiro de la carrera administrativa, no solo se ajusta a los principios y valores constitucionales, sino que al encaminarse al logro de los fines consagrados en el artículo 209 Superior, propende por la supresión de los factores subjetivos en la designación de servidores públicos y la eliminación de prácticas anti-modernas como el clientelismo, el nepotismo o el amiguismo. El principio de mérito garantiza que la función administrativa se desarrolle con fundamento en los principios constitucionales de igualdad, moralidad y la eficacia.

3.2.3. Por otra parte, la Jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que el mérito se encuentra estrechamente ligado al concurso público, pues este permite que la selección sea objetiva y obedezca a criterios claros y uniformes para el ingreso, la permanencia el ascenso y el retiro en carrera administrativa. Debe entenderse, entonces, que por regla general la forma de garantizar el criterio básico del mérito en la carrera administrativa es que la selección de los funcionarios se produzca por medio de un concurso público. Así pues, el proceso de selección debe estar dirigido a verificar las calidades académicas, los conocimientos, la experiencia y las competencias de los aspirantes y así determinar objetivamente los más aptos para desempeñar los empleos del Estado. "El concurso es así un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades propias de un cargo, e impide que prevalezca la arbitrariedad del nominador en lugar del mérito".

3.2.4 El concurso busca desterrar de las prácticas públicas la selección de funcionarios con base en criterios "Subjetivos e irrazonables, tales como filiación políticas del aspirante, su lugar de origen (...) motivos ocultos, Preferencias personales animadversión o criterios tales como el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religión o la opinión pública o filosófica, para descalificar al aspirante".

3.2.5. Adicionalmente, el concurso público permite que se hagan realidad principios de eficiencia y eficacia para el desarrollo de la función pública y que la planta de personal de las entidades del Estado esté adecuadamente capacitada para el ejercicio de su función y, así, preste sus servicios conforme los requerimientos del interés general.

3.2.6. En suma, para la Jurisprudencia Constitucional, todos los empleos de carrera administrativa para acceder, ascender y permanecer están sujetos al principio del mérito. Así como, el mecanismo para garantizar que el mencionado principio es la realización de un concurso público que permita evaluar las calidades académicas, los conocimientos la experiencia y las competencias de los aspirantes."

La desvinculación del cargo de LIPSAMIA RENDON CROSS, obedeció estrictamente al cumplimiento de los términos del CONCURSO DE MERITOS desarrollado para tal fin; razón por la cual no se le puede desconocer el derecho a la persona que ingresa a la Administración Pública luego de superar el respectivo concurso de méritos.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 37 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en lo antes expuesto y teniendo en cuenta que el Acto Legislativo Número 01 de 26 de diciembre de 2008 fue declarado inexecutable en su totalidad por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-588 de agosto 27 de 2009, con efectos retroactivos y tampoco se dan las condiciones como beneficiaria del Acto Legislativo Número 04 de 7 de Julio de 2011 por presentar Interrupción en el desempeño de la funciones del empleo ofertado, se concluye que no es recomendable para la entidad realizar un acuerdo conciliatorio.

DECISION DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, teniendo en cuenta que el Acto Legislativo Número 01 de 26 de diciembre de 2008 fue declarado inexecutable en su totalidad por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-588 de agosto 27 de 2009, con efectos retroactivos y tampoco se dan las condiciones como beneficiaria del Acto Legislativo Número 04 de 7 de Julio de 2011 por presentar Interrupción en el desempeño de la funciones del empleo ofertado, se concluye que no es recomendable para el Departamento de Santander realizar un acuerdo conciliatorio.

2. Solicitud de conciliación extrajudicial de MELBA CORZO AFANADOR.

Expone el caso el Dr. Oscar Javier Gómez Arias, Abogado del Fondo de Pensiones del Departamento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|---|--|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | PENDIENTE |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | PENDIENTE |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | MELBA CORZO AFANADOR. |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |
| VALOR DE LAS PRETENSIONES, O ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA: | \$323.698.869.00 |
| ACCIÓN JUDICIAL: | NO SEÑALA |



| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág. 38 de 59 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN:

SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD:

1. HECHOS RELEVANTES:

- A. La señora MELBA CORZO AFANADOR laboró como trabajador oficial al servicio de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER desde el 17 de enero de 1979, vinculada por medio de contrato de trabajo a término indefinido, como auxiliar de cocina adscrita a la sección de comedores y cafetería de la división de bienestar universitario.
- B. Laboró hasta el 3 de marzo de 2010, fecha en que la UIS la notificó de la Resolución no. 309 del 22 de febrero de 2010, por medio de la cual le reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación.
- C. No obstante lo anterior, la señora MELBA CORZO AFANADOR solicitó el estudio de su reconocimiento de pensión el 7 de marzo de 2005, al considerar que ya cumplió con los requisitos para acceder a tal reconocimiento, de acuerdo con el artículo 32 de la Convención Colectiva de Trabajo, el cual señala que “el trabajador oficial que cumpla 20 años al servicio del estado, 15 de los cuales hayan sido servidos a la Universidad y llegue a la edad de 50 años tendrá derecho a una pensión mensual de jubilación equivalente al 100% del promedio de los sueldos o salarios y primas recibidas en el último año de servicios”. La señora MELBA CORZO AFANADOR ya había cumplido con dichos requisitos
- D. Ante la negativa que le fuera reconocida la pensión de jubilación, la señora MELBA CORZO AFANADOR impetró acción laboral por medio de un profesional del derecho, lo cual condujo a que finalmente y por medio de conciliación, la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER le reconoció la pensión por medio del acto administrativo No. 309 del 22 de febrero de 2010.
- E. Considera la convocante que el hecho de haber tenido que laborar desde el 7 de junio de 2005, hasta el 31 de enero de 2010 le causó inmensos daños y perjuicio de todo orden, pues tuvo que laborar durante 4 años, 7 meses y 23 días, luego de haber alcanzado los requisitos para obtener la pensión de jubilación.

2. PRETENSIONES:

La UIS, el Departamento de Santander, la Nación-Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Superior de la UIS son administrativamente responsables de los daños y perjuicios materiales y morales causados a la señora MELBA CORZO AFANADOR, como consecuencia de la negligencia al no haberla pensionado desde la fecha en que pasó su solicitud, es decir, 5 de marzo de 2005 y como consecuencia ordenar a éstas entidades a pagar la suma de \$323.698.869.00 a manera de indemnización.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURIDICO: El Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Santander se abstiene de plantear un problema jurídico para



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 39 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

el presente caso, toda vez que no hay forma de analizarlo cuando no tenemos la legitimación en la causa por pasiva para adentrarnos en una explicación que pueda brindar la salida para proferir más adelante un concepto sobre el mismo.

4. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION:

CAPACIDAD JURIDICA: la convocante se encuentra representada por un profesional del derecho, previa legitimación para intervenir en la conciliación en virtud a que es la titular del derecho solicita.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Fondo Territorial de Pensiones de Santander se declara inhibido para proferir cualquier concepto con relación al presente caso, ante la carencia de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la convocante no es pensionada nuestra, sino de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, ente autónomo para decidir sobre sus diferentes actuaciones administrativas, luego no hay lugar a estudiar ningún tipo de normativa al respecto.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, ante la carencia de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la convocante no es pensionada del Fondo de Pensiones del Departamento, sino de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, ente autónomo para decidir sobre sus diferentes actuaciones administrativas, luego no hay lugar a estudiar sobre la procedencia de la conciliación en un caso en donde no se tiene competencia para tomar decisiones al respecto.

C. SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO DE GESTIÓN DE INGRESOS

Expone el caso el Dr. REYNALDO JOSE D'SILVA, Coordinador Grupo Gestión de Ingresos

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de RUBEN JIMENEZ PLATA.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|--|--|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | ANA MILENA PATARROYO RUIZ /o RUBEN JIMENEZ PLATA |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA NATURAL |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE HACIENDA |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| VALOR DE LAS PRETENSIONES, O | \$ 5.356.000.00 |



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión: 2 | Pág. 40 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA: | |
| ACCIÓN JUDICIAL: | Acción de Reparación Directa. |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | 5 de Abril de 2012 |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |

1. HECHOS RELEVANTES PRESENTADOS POR LA ACCIONANTE

HECHO PRIMERO: La peticionaria manifiesta; “ que su mandante era propietario de una Motocicleta HONDA 185 DE PLACAS PDA92 Modelo , 1982, vehículo que vendió en el año 1997, mediante traspaso en blanco .

HECHO TERCERO: Que el día 4 noviembre de 2009, mientras transitaba por la ciudad de Bucaramanga,, en el automóvil de placas BDI289 de su propiedad, fue interceptado por agente de tránsito quien retuvo su vehículo por cuenta de un embargo que recaía sobre el automotor en virtud de un proceso de ejecución fiscal por concepto de Impuestos adeudados por la motocicleta mencionada en el hecho primero del escrito y la cual a la fecha , había transferido su dominio hacia más de 12 años.

HECHO CUARTO: Que no tendiendo otra alternativa diferente a `pagar lo que supuestamente adeudaba como propietario de la motocicleta aun cuando ya no era de su propiedad y ante la necesidad de disponer de su automóvil como único medio de transporte para desempeñar sus negocios , mi cliente pago los impuestos adeudados de las vigencias de 2000. 2001. 2002, 2003, 2004 y 2006 , quedando a paz y salvo los impuestos sobre aquel vehículo ,para que se le levantara el embargo sobre el automóvil.

PRONUNCIAMIENTO DE ESTE DESPACHO FRENTE A LOS HECHOS RELEVANTES EXPUESTOS POR LA PETICIONARIA:

1. Que el Departamento de Santander, cobró el Impuesto sobre Vehículos Automotores, al propietario o Poseedor que figura en la base de datos, para el caso es el señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley 488 de 1.998.
2. Que no es cierto que el señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, haya pagado el Impuesto sobre Vehículos Automotores, de las vigencias 2000, 2001,



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 41 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|

2002, 2003, 2004 y 2006, del Rodante PDA92- toda vez que estos fueron cerrados por las Administración en el proceso de saneamiento contable que aplico en el año 2007, aprobando la depuración de cartera del impuesto de vehículos, en aplicación de la Ley 1066 de 2006. Sobre normalización de la cartera pública y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006

3. Que no es cierto que la Administración Departamental, a través de la Secretaria de Hacienda de Santander, haya embargo el bien automotor de propiedad del señor convocante, quien lo embargo fue la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga por concepto de cobros fiscales de derechos Municipales de Transito.

2. PRETENSIONES

La peticionaria considera como principales pretensiones las siguientes:

- Que se reconozca y pague al ofendido señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, los perjuicios económicos que ha sufrido por cuenta de la imprevisión y la negligencia del Estado en cabeza los funcionarios públicos que tuvieron o que tiene el deber de legalizar y formalizar los trámites administrativos, correspondientes a fin de sanear y actualizar la base de datos de las entidades públicas citadas, y de los tributos que ha tenido que sufragar sin tener obligación de hacerlo.
- Que se le reconozca y pague al señor plata la suma equivalente a (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes como valor indemnizatorio por los perjuicios morales y materiales, lucro cesante y daño emergente que la acción u omisión de la nación, alcaldía de Bucaramanga – Dirección de tránsito y transporte de Bucaramanga y la nación Gobernación de Santander- Secretaria de Hacienda departamental causaron a mi mandante al imponer pagos que estaba obligado a soportar por no ser titular del bien mueble objeto del tributo.

3. ANALISIS DEL CASO - PROCEDENCIA DE LA CONCILIACION

- **CAPACIDAD JURIDICA:** La verificación de la representación y legitimación a efectos de determinar si las personas que intervienen en el trámite conciliatorio están legitimadas o cuentan con la capacidad jurídica para conciliar es competencia exclusiva del Procurador Judicial cognoscente .
- Las pruebas que se pretenden hacer valer son las que se relacionan dentro del traslado de la convocatoria



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág. 42 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|

4. CONSIDERACIONES

En relación con la situación sub-examine efectuamos las siguientes consideraciones: De acuerdo con la Ley 488 de 1.998, el hecho generador del Impuesto Sobre Vehículos Automotores es la **propiedad o posesión** de los vehículos gravados; dentro de este contexto es natural que la administración departamental, inicie sus labores de fiscalización acudiendo a la base de datos donde encontrará de primera mano las personas inscritas como propietarios de los vehículos y por ese hecho mientras no se obtenga de las Autoridades de Tránsito los respectivos informes de novedades (tradición etc.), el ente territorial adelanta los cobros y procesos tributarios correspondientes, a quien figure en la Base de Datos de impuestos Sobre Vehículos Automotores. para el caso, el Rodante de placas **PDA92** figura a nombre del **RUBEN JIMENEZ PLATA**, es por ello que el contribuyentes debió declarar y pagar las vigencias correspondientes a los 2005, 2007, 2009, y 2010, como se puede evidenciar en el estado de cuenta que se anexa, (entidades financieras, fechas de pago y valor del impuesto).

De la misma manera con el proceso de Saneamiento Contable aplicado por el Departamento, en la fecha 01 /01 de 2007, le fueron cerradas las vigencias de 2000, 2001, 2002, 2003 , 2004 y 2006.

El año 2005, no se le aplicó el saneamiento contable porque supero el límite del valor autorizado en Impuesto para las Motocicletas entonces el señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, mediante escrito de fecha Junio 29 de 2005, solicita una declaración sugerida, en la Oficina de Gestión de Ingresos, para que se liquide el Impuesto de ese año fiscal, es así, como se le expide la Declaración del año 2005, la cual fue cancelada en la Corporación Financiera BANCAFE – DAVIVIENDA.

La llamada telefónica al señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, hacen parte de la gestión que cumple el Departamento, anualmente , desde su Call Center invitando a los contribuyentes que figuran en la base de Datos de Impuesto sobre Vehículos Automotora, para el pago de las vigencias atrasadas y la actual.

CONCEPTO:

De donde se concluye, que para el caso, que nos ocupa, no hay lugar a que se le **reconozca y pague los perjuicios económicos**, al señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, toda vez que el Departamento de Santander, a través de la Secretaria de Hacienda, ha cumplido con su deber administrativo del recaudo del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, de que trata el artículo 144 de la Ley 488 de 1.998 que reza:” La obligación de pagar el impuesto sobre vehículos Automotores se causa de (1) de enero de cada año”.

El Artículo 147. Administración Y Control: El recaudo, fiscalización liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre vehículos automotores, es de competencia del Departamento, o distrito en cuya jurisdicción deba pagar el impuesto.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 43 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|--------------|

- 1) Exclusión de responsabilidad al Departamento por rompimiento del nexo causal donde la culpa es exclusiva del contribuyente.**

Fundamentado en los siguientes aspectos:

El Departamento cobra el Impuesto anualmente a quien figure en la Base de Datos de Impuesto Sobre Vehículos Automotores, y da aplicación al Decreto Departamental 0247 del 10 de julio de 2003, que Reglamentó la Actualización Permanente de las novedades que registren los Organismos de Tránsito en Santander, dentro de los primeros 5 días de cada mes, es por ello que no se comprende cómo no se informó de dicha novedad de traspaso al Departamento, ni mucho menos cuando el señor **RUBEN JIMENEZ PLATA**, conociendo la novedad aportada por la Dirección de Tránsito, como lo expresa en su escrito la apoderada en el numeral 5 de los hechos dirigidos al Procurador Judicial ante los Juzgados Administrativos de Bucaramanga, en el año 2010, nunca la aportó.

Escrito firmado junio 29 de 2005, por el señor Rubén Jiménez Plata, solicitando liquidación del Impuesto sobre Vehículos Automotores de la vigencia de 2005. Declaraciones de pagos de las vigencias 2007, y 2008, 2009 y 2010, con sus respectivas solicitudes de declaraciones sugeridas para el pago de las mencionadas vigencias fiscales.

- 2) De la misma manera falta de Legitimación en la Causa por pasiva**, porque quien realizó el embargo fue la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, y no el Departamento, como se puede comprobar en el estado de Cuenta del Rodante de Placas PDA92, que se encuentra al día con las vigencias fiscales de 1.999 a 2010, sin ningún proceso Tributario de fiscalización, ni mucho menos en la instancia de cobro coactivo administrativo.

Pruebas:

- 1) Decreto 247 de 10 julio 2003
- 2) Resolución no. 05598 de 31 de mayo de 200, depuración de Cartera de Vehículos Automotores.
- 3) Escrito solicitando el pago de 2005 y la declaración de impuesto
- 4) Declaración de impuesto Sobre Vehículos Automotores 2007.
- 5) Declaración sugerida y pago del Impuesto de 2009
- 6) Solicitud de liquidación de la Declaración sugerida, el 5 de abril de 2010, última actuación del señor Rubén Jiménez Plata, ante la Administración Departamental.
- 7) Estado de Cuenta impuesto Sobre Vehículos Automotores Rodante PDA92



| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión. 2 | Pág. 44 de 59 |
|------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no hay lugar a que se le reconozca y pague los presuntos perjuicios económicos, al señor RUBEN JIMENEZ PLATA, toda vez que el Departamento de Santander, a través de la Secretaria de Hacienda, ha cumplido con su deber administrativo del recaudo del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, de que trata el artículo 144 de la Ley 488 de 1.998 que reza;” La obligación de pagar el impuesto sobre vehículos Automotores se causa de (1) de enero de cada año”.

C. Solicitud de Conciliación, Autopista Duitama SanGil S.A. contra los Departamentos de Santander y Boyacá.

Expone el caso, el Dr. Roberto Ardila Cañas, Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento, aclarando que si bien es cierto frente al caso objeto de estudio, la Conciliación no es requisito de procedibilidad, se somete el tema a consideración del Comité a efectos de que se pronuncie sobre la procedencia de la conciliación del caso en comento.

REFERENCIA O IDENTIFICACION DEL CASO

| | |
|---|--|
| FECHA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: | |
| APODERADO DE LA ENTIDAD: | Dr. ROBERTO ARDILA CAÑAS |
| NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS CONVOCANTES O SOLICITANTES: | AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S.A. |
| CONFLICTO PRESENTADO CON: | PERSONA JURÍDICA. |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCADA: | DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y DE BOYACA. |
| AUTORIDAD CONCILIADORA: | Procuraduría General de la Nación (Art. 80 Ley 446 de 1998) |
| VALOR DE LAS PRETENSIONES, O ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA: | Noventa y tres mil cuatrocientos treinta y ocho millones novecientos doce mil setecientos cuarenta pesos con noventa y nueve centavos. 93.438.912.740.99. |
| ACCIÓN JUDICIAL: | ARBITRAMENTO. |
| CADUCIDAD DE LA ACCIÓN: | |
| SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD: | |

HECHOS RELEVANTES

Señala el apoderado de la parte convocante que:

- El 26 de Noviembre de 2008 se abrió licitación pública No. 020, cuyo objeto consistió en la contratación bajo la modalidad de concesión



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión: 2 | Pág. 45 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|------------|---------------|

los estudios, diseños, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil, suministrando el pliego de condiciones, diferente información y documentación que hacía parte del proceso de selección.

- Autopista Duitama San Gil S.A. presentó su oferta técnica y económica conforme los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y su anexos, como consecuencia el día 20 de diciembre de 2008, el Departamento de Boyacá decidió adjudicar la licitación a favor a favor de la oferta presentada por Autopista Duitama San Gil S.A.
- El día 30 de diciembre de 2008, se celebró el contrato de concesión No. 1563 cuyo objeto consistió en la realización de los estudios, diseños, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil.
- El día 26 de febrero de 2009, se suscribió acta de inicio del contrato y con ello se abrió la etapa de preconstrucción del proyecto que tendría una duración de 12 meses y durante la cual se deberían verificar una serie de condiciones para que se pudiera iniciar la etapa de construcción y rehabilitación del proyecto.
- En este mismo sentido manifiesta que Autopista Duitama San Gil S.A., cumplió con todas las obligaciones adquiridas, y que por la omisión del Departamento (no se refiere si al Departamento de Santander o Boyacá) para expedir la resolución de peajes, el cierre financiero del proyecto no se pudo realizar dentro de los 4 meses que se habían previsto en el pliego de condiciones.
- Que el Departamento (no se refiere si al Departamento de Santander o Boyacá) extendió el plazo de la etapa de preconstrucción dela obra apartándose del principio dela buena fé que debe prevalecer dentro de las relaciones contractuales.
- Que Autopista Duitama San Gil S.A. se vio en la necesidad de solicitar la terminación del contrato de concesión, en razón a las dificultades que acontecieron con ocasión de la etapa de preconstrucción y que retrasaron el cierre financiero de la obra.
- El día 31 de octubre de 2011 se dio por terminado de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato de concesión suscrito



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 46 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------|

entre Autopista Duitama San Gil S.A. y el Departamento (no se refiere si al Departamento de Santander o Boyacá.

PRETENSIONES

Se cancele la suma de Noventa y tres mil cuatrocientos treinta y ocho millones novecientos doce mil setecientos cuarenta pesos con noventa y nueve centavos. 93.438.912.740.99., a favor de Autopista Duitama San Gil en razón de la terminación bilateral del contrato de concesión en la fase de estudio.

CONSIDERACIONES

En el presente caso se configura una *Falta de legitimación en causa por pasiva* en razón a que al Departamento de Santander no ostenta la calidad de contratista o contratante dentro del Contrato de Concesión No. 1563 de 2008, pues no es cierto que el Departamento de Boyacá haya actuado en su representación, teniendo en cuenta que no existe poder, ni acto administrativo que permita determinar que existió delegación o autorización para comprometer responsabilidad del Departamento de Santander.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, en razón a que la terminación del contrato de concesión fue bilateral y se efectuó en la etapa de estudio, además al Departamento de Santander no firmo ningún contrato en la Administración del Dr. Horacio Serpa Uribe quien para la Epoca era el Gobernador del Departamento, en este sentido por lo único que se relaciona al Departamento de Santander con el Contrato de Autopista Duitama San Gil S.A., es la firma de una carta; documento que no es suficiente para vincular al Departamento como demandado, así mismo la firma del contrato y la decisión de terminación de este no fueron suscritos con el Departamento de Santander. Por tal motivo es evidente la falta de legitimación en la causa por pasiva que reviste el caso en comento.

D. SECRETARIA DE SALUD.

1. Solicitud de conciliación extrajudicial de INGRID JOHANNA CALVETE Y OTROS.

Expone le caso la Dra. Nancy Garces Villamizar, abogada de la Secretaría de Salud del Departamento.

| | |
|----------------------------------|---|
| Oficina gestora | Secretaría de Salud Departamental |
| Fecha de elaboración de la ficha | Marzo 20 de 2011 |
| Ente conciliador | Procuraduría 159 del Circuito de Bucaramanga. |



| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión. 2 | Pág. 47 de 59 |
| Convocante | INGRID JOHANNA CALVETE RIVERO MARIA CAMILA PINILLA CALVETE LUIS CARLOS CALVETE RIVERO LUISA FERNANDA CALVETE RIVERO | | | |
| Apoderado Convocante | Dr. EDGAR ANTONIO VARGAS PUENTES | | | |
| Convocados | GOBERNACIÓN DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. UNION TEMPORAL LA PREVISORA S.A. – COMPAÑÍA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A. | | | |
| Apoderado Convocado | Dra. NANCY GARCES VILLAMIZAR | | | |
| Fecha de presentación de la solicitud | Febrero 23 de 2012 | | | |
| Fecha de citación o audiencia | Marzo 29 de 2012 (10:30 a.m.) | | | |
| Responsable de la ficha | Abogada Nancy Garcés Villamizar | | | |

IDENTIFICACION DE LOS CONVOCANTES, PRETENSION Y CUANTIA

Según solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el convocante, a través apoderado, requiere a la entidad convocada el reconocimiento y pago de daño emergente en cuantía de \$100.000.000.00.

HECHOS

El convocante manifiesta que el Señor LUIS CARLOS CALVETE CAMARGO, laboró como funcionario público en la Gobernación de Santander, en la Secretaria de Salud Departamental, en la división de apoyo administrativo institucional, hasta el 13 de agosto de 2010, fecha de su fallecimiento.

Que la Gobernación de Santander, a través de la Secretaria de Salud Departamental, luego del proceso público de contratación abreviada de menor cuantía, adquirió la Póliza No. 1001350 de Seguro de Vida, con la Unión Temporal La Previsora S.A. Compañía de Seguros Liberty Seguros S.A., con vigencia Junio 24 de 2010 a Junio 24 de 2011; de la cual se establece que el señor LUIS CARLOS CALVETE CAMARGO, es uno de sus beneficiarios, quien falleció durante su vigencia. Sin embargo los convocantes manifiestan que allí no se establece limitación alguna, ni preexistencias para éste.

Manifiestan los convocantes que el Señor LUIS CARLOS CALVETE CAMARGO, en el año 2009, le fue diagnosticado cáncer, ante lo cual y conforme al cubrimiento de la póliza de vida existente para dicha fecha, le fue cancelado por dicho concepto la suma de \$7.500.000.

Reiteran que conforme al seguro actual, el valor a cancelar es de \$100.000.000 y que los Convocantes realizaron la reclamación correspondiente a la Aseguradora por dicha suma, la cual fue objetada, aduciendo una cláusula complementaria, estableciendo la continuidad de coberturas de la vigencia anterior, en cuanto al valor asegurado para los que afectaron



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión 2 | Pág. 48 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|

amparos, y liquidando solamente \$7.500.000, lo cual les fue comunicado mediante misiva el día 29 de diciembre de 2010.

DE LA ACCION: Reparación Directa.

CONSIDERACIONES

1. La Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Salud Departamental, en aras de brindar beneficios a los trabajadores y como una prerrogativa, por mera liberalidad, decidió desde hace varios años adquirir un seguro de vida que beneficiara a todos sus trabajadores de planta y en efecto, el Señor LUIS CARLOS CALVETE CAMARGO estuvo vinculado como beneficiario de ésta, hasta el día de su fallecimiento, esto es hasta el día 13 de agosto de 2010.
2. La última póliza que beneficiaba a este trabajador fallecido, corresponde la Póliza No. 1001350 de Seguro de Vida, con la Unión Temporal La Previsora S.A. Compañía de Seguros Liberty Seguros S.A., con vigencia Junio 24 de 2010 a Junio 24 de 2011, respecto de la cual, la Secretaría de Salud Departamental canceló la totalidad de la prima correspondiente, en los términos y condiciones suscritas por las partes, cumpliendo así con su deber formal como tomador de la misma y en consecuencia respondiendo como corresponde con el beneficio propuesto a sus trabajadores.
3. Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la Secretaría de Salud Departamental, termina con el cumplimiento del pago de la prima, que ratifica el beneficio de seguro de vida a sus trabajadores, se entiende que hasta aquí termina su responsabilidad frente a los beneficiarios, pues las reclamaciones que se presenten son de exclusiva competencia entre los asegurados o beneficiarios de éstos y le entidad que otorgó la póliza ya mencionada.
4. Por tales motivos, se puede conceptuar que no es viable la conciliación, porque en este caso estamos frente a la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA la cual excluye la responsabilidad del Departamento de Santander – Secretaría de Salud Departamental.
5. Así mismo, lo anterior se sustenta, teniendo en cuenta lo expuesto como fundamento jurisprudencial, reiterada en múltiples pronunciamientos, que considero pertinente exponer a Ustedes, algunos de ellos, así:
“La legitimación material en la causa por pasiva, como es bien sabido, implica que el demandado tiene una relación real con el objeto de la pretensión; “La legitimación en la causa, por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho”10; en casos como el presente, la legitimación material en la causa por pasiva se da, si el demandado es la persona llamada a responder, en el evento de probarse todos los elementos de la responsabilidad; como lo ha dicho la Sala, “La legitimación ad causam material



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág 49 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|

alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no"¹¹

10 Sentencia del 13 de febrero de 1996. Expediente 11.213.

11 Sentencia de 19 de agosto de 1999. Actor: Gildardo Pérez. Expediente No. 12,536.

6. De idéntica manera y teniendo en cuenta lo expuesto en la respuesta emitida por parte de la Aseguradora La Previsora S.A. en la cual objetó la reclamación, y lo descrito en el clausulado de la póliza citada; en la cual describe en el texto de las Condiciones Complementarias lo siguiente: "...No aplicación de preexistencias para ninguna persona del grupo asegurado y continuidad de coberturas....Se otorga continuidad de cobertura con el valor asegurado de la vigencia anterior de \$ 15.000.000 para los asegurados que afectaron amparos..." se deduce que en razón a la reclamación que hiciera el Sr. Luis Carlos Calvete Camargo cuando le detectaron su enfermedad, la cual fue reconocida por \$ 7.500.000, se confirma que afectó el amparo de la póliza y en consecuencia tendría que dársele aplicación a lo descrito en dicha condición, en el sentido de darle continuidad de cobertura al valor asegurado de la vigencia anterior, motivo por el cual a la fecha la Aseguradora sólo autorizó cancelarle el 50% restante al valor asegurado inicialmente es decir la suma de \$7.500.000 adicionales.
7. No obstante lo anterior, y en aras de dar aplicación a la causal invocada anteriormente, el convocado debería iniciar Llamamiento en garantía con la Aseguradora, más no pretender acreditar la responsabilidad directa de la Gobernación de Santander – Secretaría de Salud Departamental, como convocado en esta diligencia, toda vez que si bien es cierto, actuó como tomadora del Seguro de Vida Grupo Póliza Normal, seguro éste que es dado a los trabajadores por mera liberalidad de la Institución; también es cierto que a quien le corresponde finalmente responder por el pago de cualquier acreencia que considere el Convocante le corresponda, es directamente la entidad aseguradora, que para el caso en estudio es la Unión Temporal La Previsora S.A. – compañía de Seguros Liberty Seguros S.A, toda vez que la objeción no se funda en el pago de la prima correspondiente, ni mucho menos en razones que involucren la responsabilidad directa del Departamento.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, no hay ningún hecho, acción u omisión por parte de la Secretaría de Salud del Departamento, pues el cumplimiento de la obligación esta concentrada en una póliza de seguros, razón por la cual nos atenemos exclusivamente a las obligaciones pactadas en el contrato de la aseguradora.

2. **Solicitud de conciliación extrajudicial de JOSE POLICARPO GERENA.**
Expone el caso la Dra. Adela Riaño Jaimes, abogada de la Secretaría de Salud del Departamento.

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Oficina gestora | Secretaría de Salud Departamental |
| Fecha de elaboración de la ficha | Marzo 23 de 2011 |



| | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión: 2 | Pág. 50 de 59 |
| Ente conciliador | Procuraduría Delegada ante los Jueces Administrativos del Circuito de San Gil. | | | |
| Convocante | JOSE POLICARPO GERENA FLOREZ LUZ MARIELA GAITAN CASTRO JAIDER ISMAEL GERENA GAITAN JOHAN GERENA GAITAN JONATAN ANDRÉS GAITAN CASTRO | | | |
| Apoderado Convocante | Dr. MANUEL HORACIO NIEVES MATEUS | | | |
| Convocados | LA NACIÓN – MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL SAN ANTONIO DE PUENTE NACIONAL | | | |
| Apoderado Convocado | Dra. ADELA RIAÑO JAIMES | | | |
| Fecha de presentación de la solicitud | 26 de Enero de 2012 | | | |
| Fecha de citación o audiencia | Pendiente. | | | |
| Responsable de la ficha | Abogada Adela Riaño Jaimes | | | |

IDENTIFICACION DE LOS CONVOCANTES, PRETENSION Y CUANTIA

Según solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el convocante, a través apoderado, requiere a la entidad convocada el reconocimiento y pago de daño moral en cuantía de \$280.000.000.00.

HECHOS

El convocante manifiesta que el día 28 de septiembre de 2011, a eso de las 7:00 A. M., llevó a su hija SARA CAMILA GERENA GAITAN al Hospital San Antonio de Puente Nacional, la niña tenía fiebre, tos y vómito, que observaban que la niña no mejoraba por lo que en varias veces solicitaron que la enviaran al Hospital de Vélez, los médicos atendieron la solicitud y a pesar de la mejoría enviaron a la menor al Hospital de Vélez con máscara de oxígeno, cuando llegaron al hospital la atendieron por urgencias al quitarle la máscara observaron a la niña ennegrecida y sin signos vitales y desconocen el motivo del desenlace de los hechos.

Se deja constancia de que con la convocatoria no se allegan pruebas.

DE LA ACCION: No se enuncia acción a impetrar.

CONSIDERACIONES

Para decidir a cerca de la posibilidad de conciliar o no en el presente asunto, ha de analizarse la participación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD, en los hechos que le sirven de base a las pretensiones de los convocantes, y por lo que podría endilgársele presunta responsabilidad y en consecuencia llamado a responder.



| | | | | |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág 51 de 59 |
|------|-----------------------|--------------------|-----------|--------------|

En el desarrollo de los hechos que condujeron a que la menor SARA CAMILA GERENA GAITAN llegará sin signos vitales al Hospital de Vélez, no se evidencian acciones u omisiones en los que haya incurrido directa e indirectamente el DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD, pues los mismos se reducen puntualmente al hecho de que la menor fue atendida y ante su poca mejoría en la salud los médicos decidieron enviarla con mascarás de oxígeno, sin embargo a su llegada al hospital de Vélez, al quitarle la máscara de oxígeno se dan cuenta que no tiene signos vitales y estaba ennegrecida.

El convocante, en su convocatoria, no señala cuales fueron las acciones u omisiones, así como tampoco aporta material probatorio que prueben las mismas, en las que directa o indirectamente haya participado el DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD, por lo que no se puede endilgar responsabilidad en los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones de la accionante y por ende no está obligado a reparar el daño causado, encontrándose así, frente a la excepción de la Falta de Legitimación ad causam material por pasiva.

Falta de Legitimación en la causa por pasiva:

La legitimación en la causa es un presupuesto de la Sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el Juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. La legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el Juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación en la causa por Pasiva, se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. De manera que como cualquier otro proceso el Juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de Legalidad y Contradicción.

Se debe tener en cuenta desde cualquier punto de vista, que la Legitimación en la causa por Pasiva, consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual la Ley permite que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda.

De conformidad con lo señalado por el convocante, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD no es el llamado a responder por los daños causados con ocasión de los hechos que conllevaron al deceso de la menor SARA CAMILA GERENA GAITAN, motivo de la presente convocatoria.

De otro lado se tiene que el Comité para la Defensa Judicial del Departamento ha adoptado como Política, mediante Acta 023 de Octubre 7 de 2010, no conciliar en las Acciones de Reparación Directa, por presunta negligencia y/o falla médica, en las que se reclamen indemnizaciones por perjuicios de tipo moral o material presuntamente causadas por las entidades prestadoras de servicios de salud.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág 52 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|--------------|

En consecuencia se conceptúa no conciliar porque en este caso estamos frente a la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA la cual excluye la responsabilidad del Departamento de Santander – Secretaría de Salud Departamental.

La anterior tesis jurídica tiene fundamento jurisprudencial, reiterada en múltiples pronunciamientos, que considero pertinente exponer a Ustedes, algunos de ellos, así:

"La legitimación material en la causa por pasiva, como es bien sabido, implica que el demandado tiene una relación real con el objeto de la pretensión; "La legitimación en la causa, por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho¹⁰"; en casos como el presente, la legitimación material en la causa por pasiva se da, si el demandado es la persona llamada a responder, en el evento de probarse todos los elementos de la responsabilidad; como lo ha dicho la Sala, "La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no"¹¹

10 Sentencia del 13 de febrero de 1996. Expediente 11.213.

11 Sentencia de 19 de agosto de 1999. Actor: Gildardo Pérez. Expediente No. 12,536.

En el presente caso, se observa que si bien puede afirmarse que la Nación, los departamentos, los municipios y los servicios seccionales de salud hacen parte del Sistema Nacional de Salud, que fue reorganizado por la Ley 10 de 1990, para los efectos de la responsabilidad patrimonial estatal que puede derivarse de la prestación del servicio médico, se requiere que el daño por el cual se reclama, pueda ser imputado a una acción u omisión de la entidad demandada, es decir, que ésta ha debido tener una relación directa con el hecho que sirve de sustento a las pretensiones¹¹; no obstante, la parte actora en el sub-lite, no atribuye conducta alguna a las mencionadas entidades, puesto que la falla del servicio que predica, se refiere exclusivamente a la atención médica que recibió la paciente María Aliria Escudero Ledesma en el Hospital San Vicente de Paúl.

11 Específicamente sobre la responsabilidad de la Nación en casos como el presente, en otra oportunidad, sostuvo la Sala, en Sentencia del 22 de abril de 2004, Expediente 14.212: "•Considera esta Sala, entonces, que la Nación tampoco tiene legitimación en la causa. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º, literal f), de la Ley 10 de 1990, al Ministerio de Salud, hoy de Protección Social, le corresponde "[v]igilar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos y las normas técnicas, administrativas y de calidad del servicio, adoptados para el sector salud, e imponer, si es el caso, las sanciones a que hubiere lugar": esta función, sin embargo, no puede comprender, sin duda alguna, la de fiscalizar y vigilar cada una de las actividades concretas, realizadas por las diferentes entidades encargadas de prestar el servicio de salud pública".

Por lo expuesto, se recomienda no conciliar en la presente solicitud advirtiéndole que este concepto se emite de conformidad con el art. 25 del CCA.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCILIAR, en razón a que no se allegan pruebas donde se le demuestre la responsabilidad que se le imputa al Departamento de Santander, atendiendo a que la carga de la prueba está en cabeza del demandante conforme a lo dispuesto al artículo 177 del Código de procedimiento civil.(buscar política del comité al respecto)



| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág 53 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|

3.Solicitud de conciliación extrajudicial de DAVID CASTILLO MENDEZ Y OTROS.

Expone el caso la Dra. Adela Riaño Jaimes, abogada de la Secretaría de Salud del Departamento

| | |
|---------------------------------------|--|
| Oficina gestora | Secretaría de Salud Departamental |
| Fecha de elaboración de la ficha | Marzo 23 de 2011 |
| Ente conciliador | Procuraduría Delegada ante los Jueces Administrativos del Cesar – Reparto. |
| Convocantes | DAVID CASTILLO MENDEZ CINDY PAOLA NIETO AVENDAÑO VALERIN MISHELLE CASTILLO NIETO |
| Apoderado Convocante | Dr. NELSON RAFAEL TRILLOS PALLARES |
| Convocados | DEPARTAMENTO DEL CESAR ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID VILLAFANE DEPARTAMENTO DE SANTANDER HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER MUNICIPIO DE AGUACHICA ESE HOSPITAL LOCAL BARAOJA CLINICA MARIA AUXILIADORA ASMET SALUD |
| Apoderado Convocado | Sin designar |
| Fecha de presentación de la solicitud | 10 de febrero de 2012 |
| Fecha de citación o audiencia | Pendiente. |
| Responsable de la ficha | Abogada Adela Riaño Jaimes |

IDENTIFICACION DE LOS CONVOCANTES, PRETENSION Y CUANTIA

Según solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el convocante, a través apoderado, requiere a la entidad convocada el reconocimiento y pago de daño moral en cuantía de \$280.000.000.00.

HECHOS

El convocante manifiesta que el día 24 de junio de 2011, llevó a su hijo FRAYDER CASTILLO NIETO al HOSPITAL LOCAL BARAOJA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA porque presentó malestar, allí le prescribieron pastillas de acetaminofen y ordenaron la salida. Durante los tres días siguientes lo llevaron nuevamente, lo trataron ambulatoriamente y le dieron la salida, sin que el menor tuviera mejoría.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental. | Versión. 2 | Pág. 54 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

El 28 de junio los padres del menor, ante el hecho de que el menor no mejoraba, decidieron llevarlo por urgencia a la CLINICA DE ESPECIALISTA MARIA AUXILIADORA DE AGUACHICA, allí le dieron la salida por encontrarse en perfectas condiciones.

El día 29 de junio el menor continua con malestar general, fiebre por lo que decidieron llevarlo a la ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID VILLAFANE DE AGUACHICA, donde le negaron atención por lo que sus padres decidieron llevarlo al HOSPITAL LOCAL BARAOJA, este ente hospitalario decide remitirlo al HOSPITAL JOSE DAVID VILLAFANE, aceptando la hospitalización del menor y le diagnostica dengue y luego de cinco (5) días decide remitirlo a un hospital de tercer nivel ante la situación de salud del menor y no tener claridad de su enfermedad, por lo que se traslada al HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, registrándose su ingreso el día 2 de julio de 2011, allí se le diagnostica dengue hemorrágico con signos de alarma, derrame pleural derecho y sepsis nosocomial a absceso de venopunción.

El 3 de julio el HUS ordena su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos, porque el menor requiere de monitoreo estricto, pero tan solo 5 días después del ingreso al HUS, cuando ya el estado de salud del menor era deplorable, la tardía en su traslado se debió a que el menor estaba cobijado por la EPS ASMET SALUD, donde se ponía en tela de juicio el pago oportuno de la misma a sus acreedores, habiéndose producido por fin su traslado el día 6 de julio a la CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS DE BUCARAMANGA, pero ya sobre la humanidad del menor se había desencadenado un daño multiorgánico imposible de revertir. El menor fallece allí el día 9 de julio de 2011.

DE LA ACCION

Se anuncia como acción eventual en sede judicial la acción de reparación directa. El menor fallece el día 9 de julio de 2011. La solicitud de conciliación se radicó el 10 de febrero de 2012. El término de caducidad de la acción de reparación directa, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A., es de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho. En el presente caso se encuentra vigente la acción a proponer.

CONSIDERACIONES

Para decidir a cerca de la posibilidad de conciliar o no en el presente asunto, ha de analizarse la participación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD, en los hechos que le sirven de base a las pretensiones de los convocantes, y por los que podría endilgársele presunta responsabilidad y en consecuencia ser llamado a responder.

En el desarrollo de los hechos que condujeron al fallecimiento del menor FRAYDER CASTILLO NIETO, en la CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS de Bucaramanga, no se evidencian acciones u omisiones en los que haya incurrido directa e indirectamente el DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD, pues los mismos se reducen puntualmente al hecho de que el menor fue atendido en un primer momento por el HOSPITAL LOCAL DE BARAOJA de Aguachica – Cesar, y ante su poca mejoría en la salud los padres del menor deciden llevarlo a la CLINICA DE ESPECIALISTA MARIA AUXILIADORA DE AGUACHICA y a la ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID VILLAFANE DE AGUACHICA, quien decide remitirlo a la E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. Este último decide el traslado del menor a una



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 55 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

unidad de Cuidados Intensivos, produciéndose su aceptación en la CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS.

Manifiesta el convocante que el día 2 de julio de 2011, a las 17:22:24 (5:22:24), el menor registra su entrada en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, lo que se prueba con la HOJA DE ADMISIÓN No. 000049:221. Que el día 3 de julio de 2011, a las 9:00 A .M., el médico pediatra Doctor ALBERTO RUEDA Z., decide remitir al menor a la Unidad de Cuidados Intensivos, dado que el menor requiere monitoreo estricto, tal como se observa en el formato de evolución y ordenes médicas del HUS. Mediante acta de fecha 06 de julio de 2011, la Clínica Materno Infantil San Luis de Bucaramanga, hospitaliza al menor, quien finalmente fallece allí el día el 9 de julio de 2011.

El convocante, en su convocatoria, no señala cuales fueron las acciones u omisiones, así como tampoco aporta material probatorio que prueben las mismas, en las que directa o indirectamente haya participado el DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD, por lo que no se puede endilgar responsabilidad en los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones de la accionante y por ende no está obligado a reparar el daño causado, encontrándose así, frente a la excepción de la Falta de Legitimación ad causam material por pasiva.

Falta de Legitimación en la causa por pasiva:

La legitimación en la causa es un presupuesto de la Sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el Juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. La legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el Juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación en la causa por Pasiva, se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. De manera que como cualquier otro proceso el Juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de Legalidad y Contradicción.

Se debe tener en cuenta desde cualquier punto de vista, que la Legitimación en la causa por Pasiva, consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual la Ley permite que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda.

De conformidad con lo señalado por el convocante, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER – SECRETARIA DE SALUD no es el llamado a responder por los daños causados con ocasión de los hechos que conllevaron al deceso del menor FRAYDER CASTILLO NIETO, motivo de la presente convocatoria.

De otro lado se tiene que el Comité para la Defensa Judicial del Departamento ha adoptado como Política, mediante Acta 023 de Octubre 7 de 2010, no conciliar en las Acciones de Reparación Directa, por presunta negligencia y/o falla médica, en las que se reclamen



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión 2 | Pág. 56 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|-----------|---------------|

indemnizaciones por perjuicios de tipo moral o material presuntamente causadas por las entidades prestadoras de servicios de salud.

En consecuencia se conceptúa no conciliar porque en este caso estamos frente a la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA la cual excluye la responsabilidad del Departamento de Santander – Secretaría de Salud Departamental.

La anterior tesis jurídica tiene fundamento jurisprudencial, reiterada en múltiples pronunciamientos, que considero pertinente exponer a Ustedes, algunos de ellos, así:

"La legitimación material en la causa por pasiva, como es bien sabido, implica que el demandado tiene una relación real con el objeto de la pretensión; "La legitimación en la causa, por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho¹⁰"; en casos como el presente, la legitimación material en la causa por pasiva se da, si el demandado es la persona llamada a responder, en el evento de probarse todos los elementos de la responsabilidad; como lo ha dicho la Sala, "La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no"¹¹

10 Sentencia del 13 de febrero de 1996. Expediente 11.213.

11 Sentencia de 19 de agosto de 1999. Actor: Gildardo Pérez. Expediente No. 12,536.

En el presente caso, se observa que si bien puede afirmarse que la Nación, los departamentos, los municipios y los servicios seccionales de salud hacen parte del Sistema Nacional de Salud, que fue reorganizado por la Ley 10 de 1990, para los efectos de la responsabilidad patrimonial estatal que puede derivarse de la prestación del servicio médico, se requiere que el daño por el cual se reclama, pueda ser imputado a una acción u omisión de la entidad demandada, es decir, que ésta ha debido tener una relación directa con el hecho que sirve de sustento a las pretensiones¹¹; no obstante, la parte actora en el sub-lite, no atribuye conducta alguna a las mencionadas entidades, puesto que la falla del servicio que predica, se refiere exclusivamente a la atención médica que recibió la paciente María Aliria Escudero Ledesma en el Hospital San Vicente de Paúl.

11 Específicamente sobre la responsabilidad de la Nación en casos como el presente, en otra oportunidad, sostuvo la Sala, en Sentencia del 22 de abril de 2004, Expediente 14.212: "Considera esta Sala, entonces, que la Nación tampoco tiene legitimación en la causa. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 9º, literal f), de la Ley 10 de 1990, al Ministerio de Salud, hoy de Protección Social, le corresponde "[v]igilar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos y las normas técnicas, administrativas y de calidad del servicio, adoptados para el sector salud, e imponer, si es el caso, las sanciones a que hubiere lugar": esta función, sin embargo, no puede comprender, sin duda alguna, la de fiscalizar y vigilar cada una de las actividades concretas, realizadas por las diferentes entidades encargadas de prestar el servicio de salud pública".

Por lo expuesto, se recomienda no conciliar en la presente solicitud advirtiéndole que este concepto se emite de conformidad con el art. 25 del CCA.

DECISIÓN DEL COMITÉ: NO CONCLIR: Por falta de legitimación en la causa por pasiva, además no obra en el expediente ninguna solicitud ninguna prueba que indique que la responsabilidad del Departamentos por una acción u omisión frente a los hechos.



| | | | | |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión. 2 | Pág. 57 de 59 |
|------|------------------------|---------------------|------------|---------------|

VI. VARIOS.**ANALISIS DE CASOS REQUISITO DEL ARTICULO 70 DE LA LEY 1395 DE 2011**

EL COMITÉ DE CONCILIACION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE CONFORMIDAD DEL ARTICULO 4 NUMERAL 4 DE LA RESOLUCION 8303 DEL 1 DE JUNIO DE 2011 Y CON EL ANIMO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 70 DE LA LEY 1395 DE 2011 ESTUDIA LOS SIGUIENTES CASOS:

AUDIENCIAS DE CONCILIACION JUDICIALES PROXIMAS A REALIZARSE EN LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS.

| JUZGADO | RADICADO | DEMANDANTE | ACCION | ASUNTO | APODERADO | FECHA DILIGENCIA |
|--|-----------|------------------------------|---|---|---|--|
| CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO | 2010-0466 | LEONILDE GOMEZ CALDERON | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRATO REALIDAD | POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. MYRIAM YEPES DE CORTÉS. POR LA PARTE DEMANDANTE: LUZ STELLA CHAIN CELIS | VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE 2012. HORA: 9:00 A.M. |
| TERCERO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA | 2006-2660 | MIRIAM PINZON ACELA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRATO REALIDAD | POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: MYRIAM YEPES DE CORTÉS. Por la Parte Demandante: PEDRO ABRAHAM ROA SARMIENTO | ONCE (11) DE ABRIL DE 2012 HORA: 9:00 A.M. |
| SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO | 2008-0405 | ORLANDO LESMES CASTRO | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRATO REALIDAD | POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: MYRIAM YEPES DE CORTÉS. Por la Parte Demandante: PEDRO ARISTOBULO MENESES RUEDA | DIEZ (10) DE ABRIL DE 2012. HORA: 10:30 AM. |
| SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO | 2008-0388 | MARIA CLARA GONZALEZ CAMACHO | NACION- MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL Y OTROS. | RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRATO | POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: MYRIAM YEPES DE CORTÉS. Por la Parte Demandante: MARLEN MORA ORDUZ | DIEZ (10) DE ABRIL DE 2012. HORA: 10:30 AM. |



| | | | | |
|------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| ACTA | Código: AP-GD-AC-01 | Gestión Documental | Versión 2 | Pág. 58 de 59 |
|------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|---|--|---|--|
| PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA | 2009-0250 | MARIA AMPARO MONSALVE GOMEZ | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | REALIDAD RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRATO REALIDAD | POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: MYRIAM YEPES DE CORTÉS. Por la Parte Demandante: ADALBERTO FLOREZ ROMERO | DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2012. HORA: 10:00 A.M. |
| NOVENO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA | 2010-0291 | PEDRO CESAR RIVERA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. | CONTRATO REALIDAD | HENSER AUGUSTO CAMPOS BALLESTEROS | MIERCOLES 11 DE ABRIL DE 2012. 10:30 A. |
| SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA | 2011 - 0113 | AZUCENA OLEJUA BARAJAS | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | CONTRATO REALIDAD | HENSER AUGUSTO CAMPOS BALLESTEROS | MARTES 27 DE MARZO DE 2012. 2:30 P.M |
| PRIMERO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION | 2007-275 | NINFA LOPEZ RICO | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | DEMANDA A LA PENSION DE JUBILACION POR CUENTA DEL HOSPITAL | HARVEY FERNANDEZ CONTRERAS | VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2012 11:00 AM |
| TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA | 2011-025 | MARIA NELLY OLAYA DE CORTES | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RELIQUIDACION PENSION OTORGADA POR EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO porque no se incluyeron factores considerados por via jurisprudencial como salario. Para el A quo estos son los factores considerados como factores salariales y debieron incluirse en la liquidación de la pensión de jubilación de la demandante, estos son Auxilio de Movilización, Prima de Alimentación, Prima extraordinaria, Prima grado, Prima de Vacaciones y Prima de Navidad, devengados durante el ultimo año de servicios. | LEILA IVONNE PRADA OSORIO | MARZO 28 DE 2012 Hora 9:45 AM (Estado del 21 de Marzo de 2012) |
| TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA | 2012-0402 | NORMA CONSTANZA BOCANEGRA GARCÍA | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO | NUBIA CECILIA PEDROZA | MARZO 28 DE 2012. 9:30 AM |

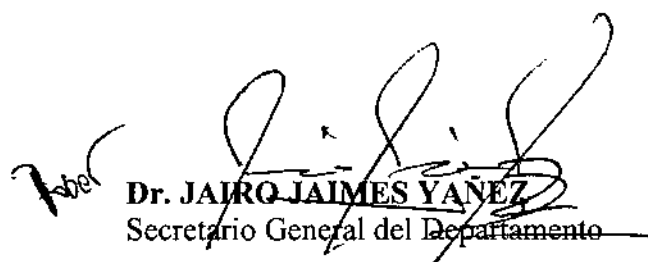


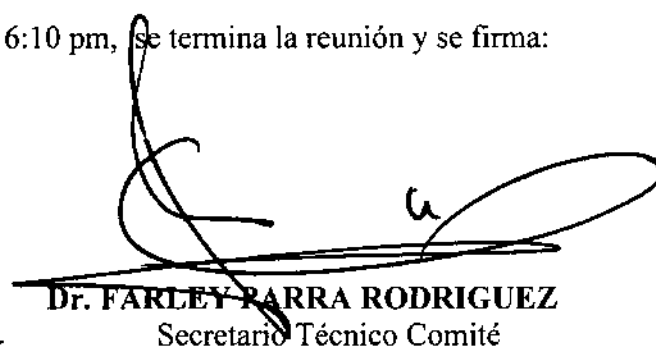
| | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------|
| ACTA | Código AP-GD-AC-01 | Gestión Documental: | Versión: 2 | Pág. 59 de 59 |
|------|-----------------------|---------------------|------------|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | DE SANTANDER - CONTRATO REALIDAD | | |
| TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA | 2009-0248 | MARINA SANTOS DE SIERRA | NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | RECLAMA RELACIÓN LABORAL GENERADA DE LA CELEBRACIÓN DE OPS CON EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - CONTRATO REALIDAD | NUBIA CECILIA PEDROZA | MARZO 28 DE 2012 10:45 AM |

DECISION DEL COMITÉ: NO CONCILIAR. Los procesos correspondientes al cuadro anterior el comité de conciliación determinó que sus apoderados judiciales no deben conciliar (ratifica los argumentos ya expuestos por éste comité cuando se agotó el requisito de procedibilidad) y por ende espera la última determinación del juez de segunda instancia.

En constancia de lo anterior y siendo las 6:10 pm, se termina la reunión y se firma:


Dr. JAIRO JAIMES YAÑEZ
Secretario General del Departamento


Dr. FARLEY PARRA RODRIGUEZ
Secretario Técnico Comité



| | | | | |
|-------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| CARTA | Código: AP-GD-RG-05 | Gestión Documental | Versión 5 | Pág. __ de __ |
|-------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|

**EL SUSCRITO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PARA LA
DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

CERTIFICA:

Que en sesión ordinaria del día 26 de marzo del año 2012, en el Comité para la Defensa Judicial del Departamento de Santander, fue estudiada la procedencia de la conciliación convocada por La Sociedad Autopista Duitama San Gil S.A. como requisito de procedibilidad ante el TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, conformado para dirimir la controversia entre el convocante y los Departamentos de Santander y Boyacá.

Que el Comité de Conciliación frente al caso en comento adoptó la siguiente decisión: *"NO CONCILIAR. Analizado y discutido el caso por los miembros del Comité acogen el concepto del Abogado, en razón a que el Departamento de Santander no esta de acuerdo con las pretensiones invocadas por el accionante y porque se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva"*.

La presente se expide a solicitud del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Santander, Dr. Roberto Ardila Cañas; en Bucaramanga a los veintisiete (27) días del mes de Marzo del año dos mil doce (2012) de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 artículo 3 de Resolución 8303 de 2011.


FARLEY PARRA RODRIGUEZ
Secretario Técnico del Comité


Proyecto: María Jimena Campos Campos



Certificado No. GP143-1



Certificado No. SC 4317-1

